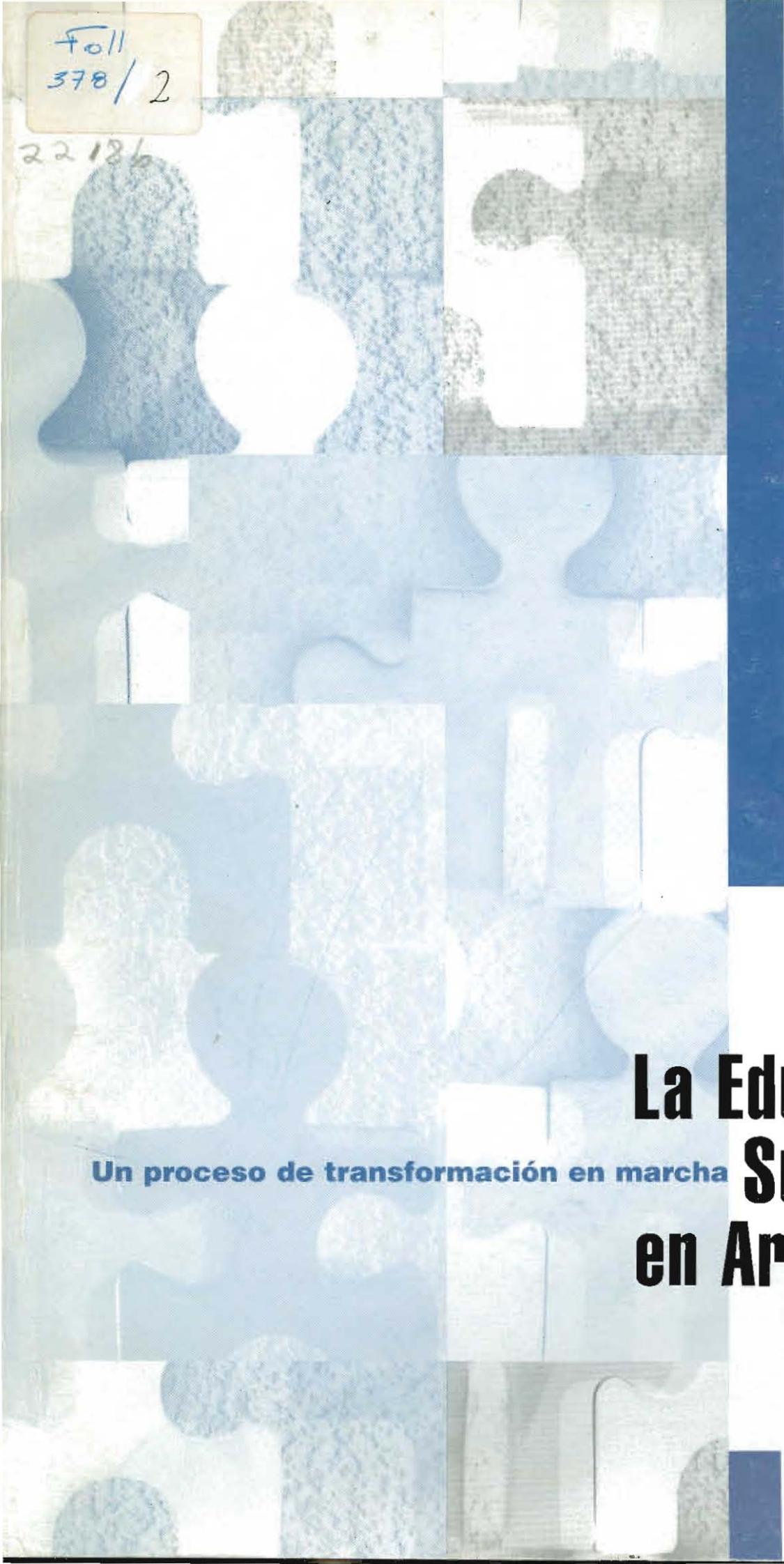


Fol 11
378 / 2

22136



Un proceso de transformación en marcha

La Educación Superior en Argentina

A U T O R I D A D E S / A U T H O R I T I E S

Susana Beatriz Decibe

Ministra de Cultura y Educación

Minister of Culture and Education

Manuel Guillermo García Solá

Secretario de Programación y Evaluación Educativa

Secretary of Educational Planning and Evaluation

Eduardo Sánchez Martínez

Secretario de Políticas Universitarias

Secretary of University Policies

Juan Carlos Del Bello

Secretario de Ciencia y Tecnología

Secretary of Science and Technology

Daniel Hernández

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica

Executive Director of the National Institute of Technological Education

Inés Aguirrondo

Subsecretaria de Programación Educativa

Undersecretary of Educational Planning

Sergio España

Subsecretario de Gestión de la Educación

Undersecretary of Educational Management

Eduardo Roque Mundet

Subsecretario de Desarrollo de la Educación Superior

Undersecretary of Higher Education Development

José Elisardo Fortes

Subsecretario de Administración

Undersecretary of Management

La Educación Superior en Argentina

Un proceso de transformación en marcha



**Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Secretaría de Políticas Universitarias
Argentina, 1998**

INV 022186

SIG *Foll*
378

LIB 2

I N D I C E

1 • LOS EJES DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	8
2 • LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA DE FIN DE SIGLO	10
3 • LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS DE LA DÉCADA DEL NOVENTA	15
4 • LAS GRANDES METAS	16
5 • LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	17
a- UN NUEVO MARCO NORMATIVO: LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	17
b- EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	18
c- EFICIENCIA Y EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS	22
d- EL MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA GESTIÓN	24
e- EQUIDAD EN EL ACCESO Y AVANCE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	25
f- AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR	26
g- ARTICULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON EL SECTOR PRODUCTIVO	27
h- ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA	29
6 • PRIORIDADES PARA EL FUTURO	30
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	30
SISTEMAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y ARTICULACIÓN CON EL NIVEL MEDIO	30
REFORMAS CURRICULARES PARA EL INCREMENTO DE LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	31
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	32
TRANSFORMACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL Y JERARQUIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA	32
ANEXO ESTADÍSTICO	33



Educación Superior en Argentina

Un proceso de transformación en marcha

La Educación Superior en Argentina

Un proceso de transformación en marcha

En la actualidad existe en todo el mundo, un amplio acuerdo respecto de los grandes cambios que la educación superior debe encarar para afrontar los desafíos que se plantean en este fin de siglo y seguramente se profundizarán en el futuro.

Los objetivos de la transformación son compartidos y universales: mejorar la calidad de la formación ofrecida, de la investigación, y de los servicios prestados; priorizar la relevancia social de los conocimientos que se generan y transmiten; asegurar la equidad, que posibilita la igualdad de oportunidades, y lograr que todo eso se haga con la necesaria eficiencia.

Pero en ese proceso los países siguen caminos diversos que responden a las características propias de sus sistemas educativos y a sus problemas específicos. Además, las vías elegidas suelen estar vinculadas a las tradiciones culturales, las condiciones institucionales, las restricciones económicas y las opciones políticas.

Este documento se propone describir la situación de la educación superior en Argentina y presentar, en sus grandes rasgos, la estrategia adoptada por nuestro país para transformar su sistema de educación superior, en lo cual viene trabajando intensamente desde comienzos de la presente década.

Más allá de las particularidades, cabe destacar que las políticas implementadas se enmarcan en los lineamientos definidos por la UNESCO para el sector:

- *considerar a la educación superior como un elemento imprescindible para el desarrollo socio-económico y cultural de los países;*
- *respetar la autonomía institucional y la libertad académica, como condiciones necesarias para el desarrollo de la formación superior, promoviendo simultáneamente una mayor responsabilidad de las instituciones ante la sociedad;*

- *promover el incremento de la pertinencia y de la calidad de la educación impartida, garantizando que el mérito sea la base para el acceso y avance en el sistema, y tendiendo a construir un sistema diversificado que pueda dar respuesta a las distintas demandas educativas de la población;*
- *asumir el compromiso de incrementar los recursos públicos y privados destinados al sector, promoviendo la diversificación de las fuentes de financiamiento y la mayor eficiencia en el uso de los recursos y mejorando los sistemas de gobierno y de gestión de las instituciones;*
- *fortalecer la dimensión internacional de las actividades académicas, favoreciendo el intercambio del conocimiento y la creciente interrelación entre los distintos actores de las instituciones de diferentes países.*

Esta es una ocasión oportuna para hacer un breve balance de los cinco años de gestión transcurridos desde la creación, en 1993, de la Secretaría de Políticas Universitarias, como ámbito específico para atender las cuestiones de la educación superior.

Aunque muchas de las iniciativas sobre las que se da cuenta en este trabajo son de reciente implementación y es aún prematuro intentar evaluar sus resultados, la política para el sector ha permitido producir importantes cambios que ya pueden ser percibidos y que constituyen una base sólida para continuar el proceso de transformación iniciado.

En primer lugar, la problemática de la educación superior ha sido jerarquizada: la creación de una Secretaría de Estado como responsable del área generó un ámbito de discusión, de coordinación del sistema y de generación de políticas específicas que no existía anteriormente. Contamos ahora con un espacio institucional con la capacidad para diseñar e implementar políticas para el sector.

En segundo lugar, la educación superior comenzó a ser tratada como una cuestión de Estado: el accionar de la Secretaría estuvo guiado por una permanente búsqueda de consenso con los demás actores del sistema. El Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas son organismos habituales de consulta para el Ministerio. Las iniciativas que se ponen en marcha son discutidas y acordadas con los miembros de los organismos representativos de las universidades.

En tercer lugar, la transparencia en el funcionamiento del sistema y en la gestión de las políticas públicas sin duda ha mejorado. El vínculo entre las Universidades y el Estado se ha hecho más maduro: las negociaciones están basadas en criterios más objetivos y racionales y ya no se recurre a la simple presión para lograr resultados.

Finalmente, los cambios estructurales que se han producido en la educación superior nos acercan a los sistemas de los países que más han avanzado en este campo. La generalización de los estudios de posgrado a todas las disciplinas y el desarrollo de un significativo conjunto de programas de maestría, permitirá mejorar la calidad de las actividades académicas de docencia e investigación y en consecuencia del nivel de formación de los graduados. Este desarrollo ofrece además la posibilidad de continuar los estudios de cuarto nivel en el país, en carreras acreditadas y de calidad, cuando hasta hace algunos años, en muchas áreas disciplinarias, era necesario ir al exterior para realizarlos. Obviamente las oportunidades de llevar a cabo este tipo de estudios se han ampliado.

De las modificaciones más sustanciales introducidas en este período no habrá seguramente retroceso, en particular en cuanto a las políticas de coordinación interinstitucional entre las universidades estatales y privadas, de evaluación y acreditación de programas e instituciones y de financiamiento asociado a programas de desarrollo institucional y de mejoramiento de la calidad.

Asimismo, se ha avanzado sustancialmente en la profesionalización de la gestión de la educación superior y en la generación de información confiable y transparente sobre el sistema de educación superior. Son logros destinados a perdurar.

En los próximos años se deberán afrontar los desafíos pendientes, para construir un sistema de educación superior que cuente con instituciones modernas, ágiles, flexibles y que desarrollen sus actividades con los altos niveles de calidad y eficacia que se requieren para poder entrar al siglo XXI y responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento.

En los últimos diez años, el sistema de educación superior argentino experimentó un notable crecimiento y una diversificación institucional sostenida, aunque también cierto deterioro en el nivel académico de las universidades, resultado de procesos en los que incidieron políticas autoritarias de agresión a la universidad, el progresivo relajamiento de los sistemas de selección, la insuficiencia de los recursos y el uso no siempre eficiente de los mismos.

En el marco de la crisis económica y de las finanzas públicas de la década del ochenta, la explosión de la matrícula universitaria -particularmente a partir de 1984, como consecuencia de las demandas democratizadoras y la eliminación de las restricciones al ingreso- no pudo ser acompañada por un aumento proporcional del financiamiento universitario, hecho que agravó la situación del sistema.

La estabilidad monetaria lograda a principios de la década del noventa, la recuperación del crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas permitieron iniciar acciones tendientes a revertir dicha situación, particularmente en lo que hace al financiamiento del sector público. Desde comienzos de la década, los fondos destinados a las universidades pudieron ser incrementados año tras año.

Sin embargo, el aumento de los recursos estatales no es una condición suficiente para transformar la educación superior en el sentido de hacer más equitativo el acceso, mejorar la calidad y la pertinencia de las actividades académicas y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos.

A partir de 1993; desde el Ministerio de Cultura y Educación se definió un conjunto de estrategias y se puso en marcha una serie de programas dirigidos a lograr la transformación estructural de la educación superior. El propósito fue avanzar hacia la conformación de un sistema con creciente capacidad de autorregulación, integrado por instituciones autónomas y autárquicas con capacidad de gestionar su propio desarrollo, que acepten, sin embargo, como contrapartida, adoptar prácticas de evaluación externa y acreditación que permitan estimular su esfuerzo por el mejoramiento de la calidad y dar cuenta de los resultados de su accionar.

El Estado está jugando un papel activo en la conducción de este proceso de reforma, dentro de las pautas de modernización e integración que caracterizan actualmente las políticas universitarias en el continente. Las iniciativas desarrolladas suponen una suerte de "regulación indirecta" del sistema. No se trata de

asumir el papel de un Estado que planifica todo centralmente ni tampoco de dejar librado a una dinámica aislada el desarrollo del sistema, sino de implementar una serie de políticas que, sin intervenir directamente en las instituciones, provean incentivos para producir los cambios buscados.

La transformación de la educación superior supone asentar sobre nuevas bases la relación Estado-Universidades. Al Estado le corresponde resguardar la fe pública que la sociedad deposita en los establecimientos de educación superior, garantizar niveles de calidad y excelencia de sus egresados y maximizar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos destinados por la sociedad a este sistema. Sin embargo, son las instituciones las que deben diseñar e implementar las estrategias de cambio para mejorar la calidad y pertinencia de los servicios que ofrecen, incrementar su vinculación con el sector productivo, diversificar sus fuentes de recursos, gobernarse y administrarse en forma autónoma y responsable, así como demostrar mayor eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos.

La evaluación y el financiamiento orientado al logro de metas acordadas son mecanismos que permiten superar las formas de control y fiscalización burocrática sobre las instituciones y posibilitan un tipo de regulación del sistema que respeta la autonomía al tiempo que promueve la responsabilidad en el uso de los recursos y el rendimiento de cuentas ante la sociedad.

Las acciones implementadas se han orientado básicamente a promover cambios en las reglas de juego, incrementando la autonomía de las instituciones pero al mismo tiempo definiendo objetivos prioritarios para el desarrollo del sistema y generando mecanismos para posibilitar su concreción.

En este sentido, junto con las diferentes iniciativas desarrolladas para promover la transformación, se realizaron importantes esfuerzos para mantener un sistemático y significativo crecimiento de los recursos estatales destinados al financiamiento del sistema universitario nacional, los que lograron incrementarse, entre 1992 y 1998, en un 63 por ciento.

Esto demuestra el compromiso y la importancia que el Estado le ha otorgado a la educación superior, en función del valor estratégico que ha adquirido el conocimiento como elemento central del nuevo paradigma social, productivo y cultural que está consolidándose en este fin de siglo.

Argentina cuenta con un sistema de educación superior diversificado y complejo, conformado por diferentes tipos de instituciones: universidades nacionales, universidades de gestión privada, institutos universitarios e institutos terciarios no universitarios, orientados en su mayoría a la formación de docentes para el nivel básico. En la actualidad existen 36 universidades nacionales, 43 privadas, 10 institutos universitarios (5 públicos y 5 privados) y alrededor de 1.700 institutos terciarios no universitarios, de los cuales un poco más de la mitad son estatales.

CUADRO 1

**Número de instituciones
universitarias por tipo de institución**

1998

Total de Instituciones Universitarias Argentinas	89
Universidades Nacionales	36
Institutos Universitarios Nacionales	5
Universidades Privadas (<i>con autorización definitiva</i>)	22
Universidades Privadas (<i>con autorización provisoria</i>)	21
Institutos Universitarios Privados (<i>con autorización definitiva</i>)	2
Institutos Universitarios Privados (<i>con autorización provisoria</i>)	3

En la última década, el sector universitario experimentó una fuerte expansión: se crearon diez nuevas universidades nacionales y el número de privadas se duplicó. Tanto el sector público como el privado son heterogéneos en términos del tamaño y la antigüedad de las instituciones, la importancia relativa de las funciones de docencia, investigación y extensión, el desarrollo del nivel de posgrado, el prestigio y la calidad de sus actividades.

La matrícula universitaria a nivel de grado es de casi un millón de alumnos, de los cuales el 86% se encuentra en el sector público. Además, en los institutos terciarios no universitarios cursan aproximadamente 230 mil alumnos en el sector estatal y otros 130 mil en el sector privado. El sector de universidades privadas muestra un comportamiento más dinámico que el sector público en términos de crecimiento de la matrícula: entre 1992 y 1997 el número de alumnos aumentó en un 31%, en tanto que el crecimiento experimentado en las universidades nacionales fue del 23%.

Fe de errata

En el Gráfico 1 los datos corregidos de la distribución de alumnos según rama de estudio, correspondientes al año 1997 son:

Cs. Humanas:	13%
Cs. Médicas:	14%
Cs. Sociales:	40%
Cs. Básicas:	33%
n: 860.661	

La Educación Superior en Argentina

Un proceso de transformación en marcha

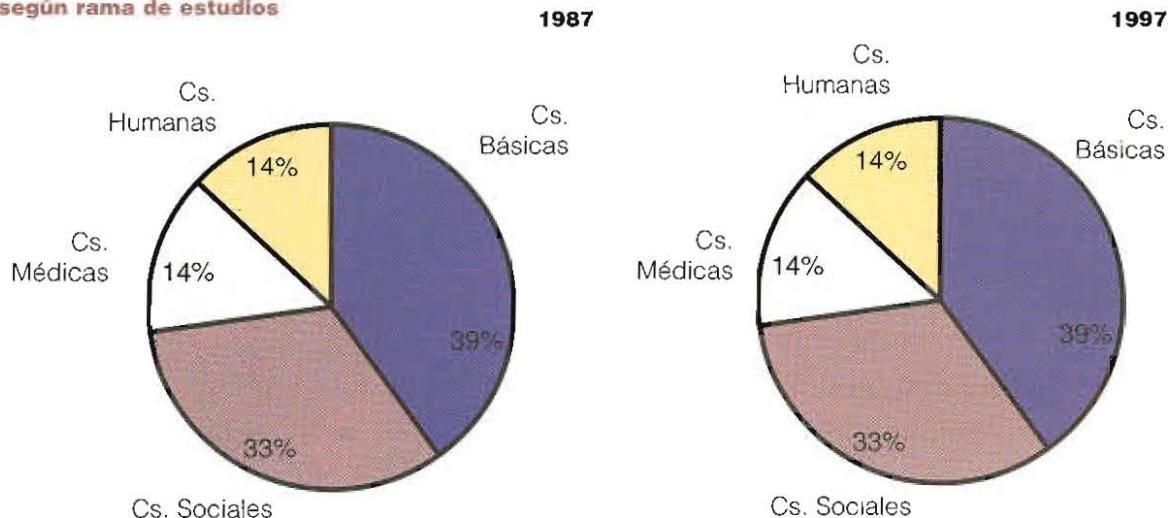
Matrícula universitaria

	Matrícula universitaria		Distribución porcentual		Tasa de crecimiento
	1992	1997	1992	1997	
Total	803.623	996.356	100%	100%	24%
Universidades Nacionales (*)	698.561	860.661	87%	85%	23%
Universidades Privadas (*)	105.062	135.695	13%	14%	31%

(*) Datos estimados para el año 1997

La matrícula se concentra mayoritariamente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Las Ciencias Básicas y Tecnológicas han perdido el predominio que tenían a comienzos de los años ochenta, cuando casi la mitad del alumnado pertenecía a estas áreas disciplinarias. En el sector público, las Ciencias Sociales vienen incrementando sistemáticamente su participación dentro del alumnado: del 33% que representaban en 1987, pasaron al 40% en 1997. En las universidades privadas la concentración en el área de Ciencias Sociales es aún mayor: 62%.

GRAFICO 1
UNIVERSIDADES NACIONALES
Alumnos según rama de estudios

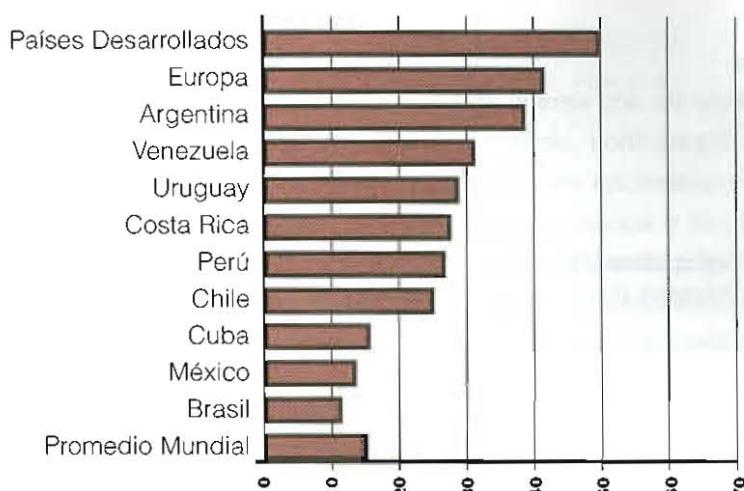


n: 618.651

n: 860.661

La cobertura del sistema de educación superior es amplia. La tasa bruta de escolarización superior alcanza al 40% del grupo de edad correspondiente (jóvenes de 18 a 23 años), muy superior al promedio latinoamericano que ronda el 20%, y similar a la de muchos países desarrollados.

GRÁFICO 2
**Tasas brutas de escolarización
 a nivel terciario. Año 1994**



Fuente Para países de América Latina· BID, La Educación Superior en América Latina y el Caribe. Documento de Estrategias N° Edu -101, 1997
 Para países de Europa, países desarrollados y promedio mundial UNESCO, Anuario Estadístico '97.

La oferta universitaria a nivel de posgrado muestra un significativo crecimiento. Existen en la actualidad más de mil carreras dictadas en instituciones públicas y privadas, entre las que predominan las maestrías y las especializaciones. El veloz surgimiento de las carreras de maestría constituye una innovación en Argentina, ya que a inicios de los años ochenta prácticamente no se registraban programas de este nivel. Otro de los hechos relativamente novedosos es que la formación de posgrado se está extendiendo al conjunto de las disciplinas, ya que hasta no hace mucho tiempo, sólo estaba consolidada en las Ciencias Exactas y Naturales.

CUADRO 3
**Carreras de posgrado, según tipo
 de institución que las ofrece.**

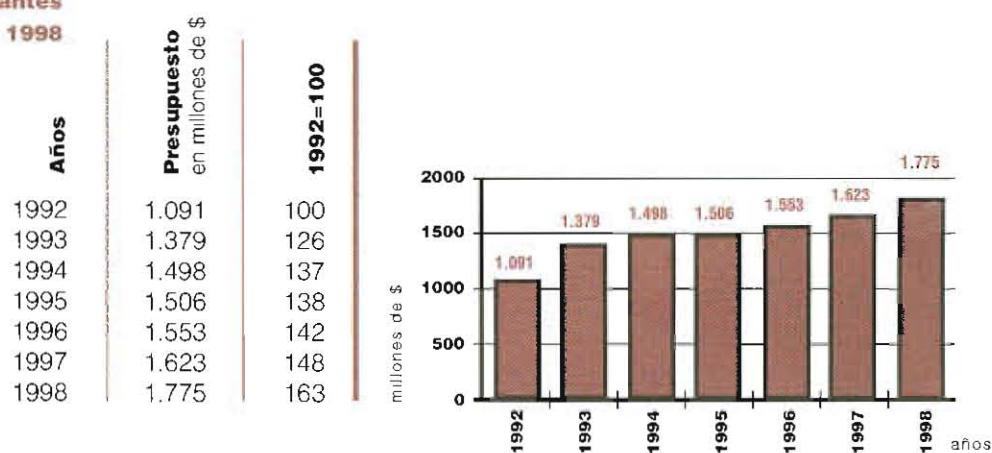
Tipo de Instituciones	Doctorados	Maestrías	Especializaciones	Total General		Año 1997
	Nº	%	Nº	%		
Sector Público	136	268	263	667	66	
Sector Privado	91	125	130	346	34	
Total	227	393	393	1013	100	

En el sistema público se desempeñan 98.200 docentes universitarios, de los cuales alrededor de 18.000 realizan actividades de investigación en sus instituciones, hecho por el cual perciben una remuneración adicional en carácter de incentivo al desarrollo integrado de la carrera académica. Aunque es bajo el porcentaje de docentes con dedicación exclusiva a la universidad y existe una importante proporción de profesores con una dedicación par-

cial, se está logrando incrementar paulatinamente el cuerpo de profesores dedicados plenamente a las actividades de docencia, investigación y extensión.

El presupuesto del sistema público para las universidades asciende en 1998 a \$1.775 millones, a los cuales deben agregarse unos 170 millones provenientes de recursos propios generados por las universidades.

CUADRO 4
Evolución del presupuesto universitario. A valores constantes de 1998

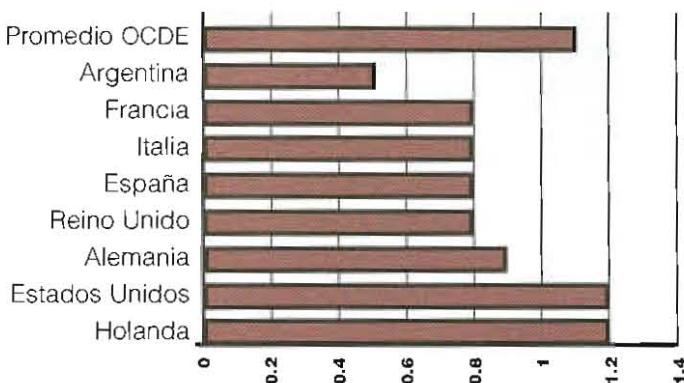


El incremento de los recursos destinados al sector ha permitido mejorar el nivel de participación del presupuesto universitario en el Producto Bruto Interno, llegándose en la actualidad al 0,52%. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que esta participación es sólo la mitad de la que se observa, en promedio, en los países de la OCDE para la educación superior, que asciende al 1,1 % del PBI.

Sin duda es necesario mejorar esta situación, lo que debe ir acompañado por una transformación del sistema que permita adecuar la enseñanza, la investigación y los servicios que ofrecen las universidades a los requerimientos que plantea la sociedad actual.

GRAFICO 3

**Participación porcentual
del gasto público en educación superior
de países seleccionados. Año 1992**



Fuente OCDE. "Education at a Glance", 1995
Para Argentina: SPU. "Anuario 1996 de Estadísticas Universitarias", 1997

En síntesis, el sistema universitario argentino experimentó un fuerte crecimiento en el número de instituciones, particularmente en el sector privado, y una expansión y generalización de la oferta de cuarto nivel. Sin lugar a dudas, la calidad de la oferta difiere entre instituciones y aun dentro de una misma universidad o disciplina. Por ello, la cuestión de la evaluación y mejoramiento de la calidad se constituyeron en temas centrales en la discusión sobre educación superior de la última década en nuestro país.

Simultáneamente, otra de las características de la educación universitaria que, junto con la calidad, ha sido objeto de debate y de particular atención desde Gobierno en materia de políticas hacia el sector, es la escasa eficiencia interna con la que operan las instituciones del sistema: las tasas de egreso son relativamente bajas y la duración de las carreras es excesiva. Aunque son múltiples los factores que pueden explicar estos déficits, la alta proporción de alumnos que trabajan, la ausencia en las grandes universidades de sistemas de acceso más rigurosos y las laxas condiciones exigidas para mantener la regularidad de los alumnos, forman parte del problema. Mejorar estos indicadores y garantizar la calidad en el nivel de formación de los egresados constituyen los principales desafíos a enfrentar para el futuro.

**LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS
DE LA DÉCADA DEL NOVENTA**

3

Los principales problemas y desafíos al comenzar la década del noventa eran los siguientes:

- **Progresivo deterioro de la calidad y del nivel de formación de los graduados**, resultado de procesos en los que incidieron políticas autoritarias de agresión a la universidad y de expulsión de sus profesores e investigadores más calificados, políticas democratizadoras facilistas, el progresivo relajamiento de los sistemas de selección, la insuficiencia de los recursos y su uso poco eficiente.
- **Bajo rendimiento académico**, reflejado, entre otros indicadores, en una baja relación graduados/ingresantes y en una excesiva duración real de las carreras.
- **Escasa equidad en el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema**, como consecuencia de las políticas de gratuidad total y de la carencia, hasta hace poco tiempo, de sistemas de becas y créditos destinados a apoyar a quienes cuentan con el mérito pero no con los recursos económicos necesarios para continuar sus estudios.
- **Ausencia de sistemas de admisión y de mecanismos de articulación con el nivel medio**, que faciliten el tránsito entre ambos niveles y permitan una adecuada selección de los ingresantes a la universidad sobre la base de su capacidad y mérito.
- **Ausencia de información estadística confiable**, que sirviera de base para la toma de decisiones y para el mejoramiento de la gestión de las instituciones.
- **Desinversión e inequitativa asignación de los recursos presupuestarios** entre las instituciones, basada en la distribución histórica y en la capacidad de influencia, desvinculada del desempeño y de los logros de cada institución.
- **Escasa articulación** con los requerimientos y demandas del sector productivo y de la sociedad.
- **Ausencia de un marco normativo común** para el nivel superior, capaz de sentar las bases del sistema y de promover las necesarias reformas.

El propósito central de la política universitaria encarada desde comienzos de la década fue, en consecuencia, **el de promover la reforma del sistema de educación superior**, en la búsqueda de:

- una oferta diversificada, de calidad y adecuada a las necesidades de la sociedad actual;
- una mayor eficiencia en el uso de los recursos que la sociedad destina a la educación superior, para lo cual se requiere una gestión responsable y transparente de las políticas públicas y del gobierno de las instituciones;
- una mayor equidad en el acceso y avance de los alumnos en el sistema así como en la distribución de los recursos públicos entre las instituciones;
- una mayor coordinación en el interior del sistema de educación superior y articulación con los otros niveles educativos.

Desde un comienzo estos objetivos se enmarcaron en una política de:

- respeto a la autonomía de las instituciones universitarias, promoviendo una mayor responsabilidad por parte de ellas frente a la sociedad;
- búsqueda de un nuevo estilo de relación entre el Estado y las Universidades, en el que éstas deben tener amplia autarquía para el manejo de los recursos y el Estado debe asignarlos en función de resultados previamente acordados y de la eficiencia con que se logran;
- integración en el proyecto de transformación de los principales actores del sistema, buscando el diálogo con las instituciones para facilitar la construcción de consensos y dando mayor protagonismo a sus organismos de coordinación.

LAS ESTRATEGIAS
Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

5

Las estrategias implementadas en el marco de la nueva Ley de Educación Superior se traducen en una serie de programas e iniciativas articulados, que apuntan al mejoramiento de la calidad, de la información y de la gestión, a la equidad y eficiencia en la asignación de recursos y en el desempeño académico de los estudiantes, a la ampliación de la oferta y a la articulación del sistema en su conjunto y con el medio productivo y social en el que se inserta.

a) **Un nuevo marco normativo:** *la Ley de Educación Superior*

Hasta 1995, la Argentina no tenía un instrumento normativo que regulara el funcionamiento de la educación superior en su conjunto. Las normas vigentes provenían de la sumatoria -y en ocasiones de superposiciones- de leyes, decretos y resoluciones ministeriales diversas. Una de las principales iniciativas desarrolladas fue la preparación y posterior aprobación de un nuevo marco normativo para el nivel superior.

La Ley de Educación Superior Nro. 24.521, sancionada el 20 de julio de 1995, dotó al sector de un marco institucional que regula de modo estable y previsible su organización y funcionamiento. La Ley ha sido, además, uno de los principales instrumentos para impulsar la transformación estructural del sistema, aunque no ha dejado de generar controversias. Las que siguen son algunas de sus principales características:

- Abarca a todo el sistema de educación superior universitaria y no universitaria, pública y privada. El sistema universitario permanece bajo la regulación de la Nación, mientras que el sector terciario no universitario, tras la descentralización de estos establecimientos, queda bajo la administración y regulación de cada jurisdicción provincial.
- Prevé la coordinación y articulación regional de las instituciones universitarias públicas y privadas, a través de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior, integrados por representantes de las universidades de una misma región y de los gobiernos provinciales, a los que pueden integrarse también representantes de los sectores productivos locales.
- Reconoce y amplía la autonomía y la autarquía de las instituciones universitarias. Reduce los controles estatales en el otorgamiento de la mayoría de los títulos, concentrando la atención del Estado en las carreras que afectan el interés público (por ejemplo, en el área de ciencias de la salud). También elimina la

injerencia estatal en la fijación de los salarios y de las condiciones laborales de los docentes, que quedan bajo responsabilidad de cada institución.

- Institucionaliza la evaluación interna y externa de las instituciones así como la acreditación de carreras como herramientas para alcanzar el mejoramiento de la calidad y la modernización de las instituciones, creando un organismo autónomo e independiente encargado de llevar adelante estos procesos: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
- Jerarquiza el papel de los académicos en el gobierno de las universidades, dando mayor participación a los profesores en los organismos colegiados, e impulsa una mayor agilidad y flexibilidad en la gestión universitaria, otorgando mayores atribuciones a las instancias ejecutivas. Asimismo, establece que los estudiantes, para participar en los organismos de conducción de las universidades públicas, deben cumplir con las condiciones de regularidad y haber cursado al menos el 30% del plan de estudio de sus carreras.
- Incorpora instrumentos destinados a mejorar la equidad al permitir a cada Universidad el arancelamiento de los estudios de grado, previendo que dichos fondos deben destinarse al otorgamiento de becas para aquellos estudiantes de bajos recursos que cuenten con las capacidades para realizar estudios universitarios.
- Prevé una mayor racionalidad en las formas de asignación del presupuesto estatal a las universidades públicas, dejando de lado la distribución inercial para pasar a modalidades de financiamiento basadas en indicadores objetivos que toman en cuenta la equidad, la calidad y la eficiencia en el uso de los recursos.

b) El mejoramiento de la calidad

En el marco de la crisis que signó el desarrollo de los años ochenta, del significativo aumento de la matrícula y de la expansión y diversificación institucional que acompañó la creciente demanda educativa, se produjo, como ya se señaló, un cierto deterioro cualitativo en el nivel académico de las instituciones. Estos procesos agravaron la delicada situación de las universidades, que habían sufrido las negativas consecuencias de las políticas implementadas durante las dictaduras militares.

Consecuentemente, se encararon desde el Gobierno Nacional estrategias tendientes a revertir dicha situación y así cumplir con la responsabilidad de garantizar la oferta de un servicio educativo con adecuados niveles de calidad y de resguardar la fe pública que la sociedad deposita en sus instituciones educativas.

Las políticas implementadas para el mejoramiento de la calidad están estructuradas en dos ejes principales: i) evaluación y ii) financiamiento ligado a la calidad.

La promoción activa de la evaluación comenzó en 1993, cuando el Ministerio de Cultura y Educación generó una serie de iniciativas tendientes a facilitar la instalación de una cultura de la evaluación y la acreditación en el sistema universitario. Aunque el proceso de institucionalización de la evaluación fue complejo y conflictivo, culminó con la generación de un grado importante de consenso con las organizaciones representativas de las universidades que permitió llevar adelante, en 1995, un proceso de evaluación y acreditación de las carreras de posgrado y la creación, a través de la Ley de Educación Superior, de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo autónomo que tiene a su cargo la evaluación institucional y la acreditación de carreras. Los hitos principales de la institucionalización de la evaluación fueron los siguientes:

- En 1993, se impulsó la firma de convenios entre el Ministerio de Cultura y Educación y las Universidades Nacionales para llevar a cabo procesos de autoevaluación y evaluación externa de las instituciones. Estos convenios establecían que el Ministerio se comprometía a financiar el apoyo técnico para la autoevaluación y la totalidad de los gastos de la evaluación externa. En ese momento, la mitad de las Universidades Nacionales suscribieron estos convenios, muchas de ellas iniciaron las actividades de evaluación y en los dos años siguientes tres instituciones concluyeron sus evaluaciones externas. Con la sanción de la Ley de Educación Superior la evaluación institucional quedó a cargo de la CONEAU.
- En 1995, la *Comisión Nacional de Acreditación de Posgrados (CAP)* llevó a cabo -a partir de una convocatoria de presentación voluntaria- un proceso de acreditación de carreras de posgrado, en el que se evaluaron, acreditaron y calificaron 176 carreras, pertenecientes a universidades públicas y privadas. En este proceso resultaron acreditadas el 60% de las carreras que realizaron presentaciones.

- En 1996, se constituyó y se puso en marcha la *Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)*. Las funciones de esta comisión son: la evaluación institucional de todas las universidades argentinas, complementaria de las autoevaluaciones realizadas por las instituciones; la acreditación de los estudios de posgrado y de las carreras de grado que afectan al interés público; y la formulación de recomendaciones sobre los proyectos de creación de nuevas universidades.

Principales actividades realizadas por la CONEAU:

- **Ha evaluado 43 proyectos de nuevas universidades (37 privadas, 4 nacionales y 2 provinciales), de los cuales sólo 6 obtuvieron una resolución favorable.**
- **Ha llamado a convocatoria para la acreditación de carreras de especialización, en la que se han presentado 803 solicitudes que están siendo evaluadas y ha iniciado la acreditación de carreras de maestría y doctorado. Sus resultados están previstos para 1999.**
- **Ha finalizado la evaluación externa de dos Universidades Nacionales, que se agregan a las tres evaluaciones externas realizadas anteriormente a través de los Convenios firmados con el Ministerio de Cultura y Educación.**

Los avances en el área de evaluación institucional han sido significativos. En la actualidad existen 27 instituciones con procesos de evaluación en marcha.

Procesos de evaluación en las Universidades	Nacionales	Privadas	Total
Autoevaluaciones concluidas	11	2	13
Evaluaciones externas concluidas	5		5
Procesos de evaluación en marcha	8	14	22
Instituciones involucradas en procesos de evaluación	13	14	27

La creación de la CONEAU instituyó, por primera vez en la historia de nuestro país, un conjunto de herramientas imprescindibles para garantizar la EVALUACION DE LA CALIDAD universitaria en un marco de amplia autonomía académica.

En la comunidad universitaria ya existe una clara conciencia de que la evaluación es un instrumento fundamental para la toma de decisiones y la elaboración de políticas institucionales.

La evaluación universitaria es un importante instrumento de concientización de la comunidad académica involucrada y permite que la universidad informe de modo transparente a la sociedad sobre el cumplimiento de sus funciones, pero adquiere todo

su sentido en tanto antecedente de programas tendientes a encarar la modificación de las debilidades detectadas en el proceso de evaluación.

De allí que, complementariamente a la promoción e institucionalización de la evaluación, se hayan creado mecanismos para fomentar el desarrollo de las capacidades y la formación de los recursos humanos en la educación superior (Programa de Incentivos) y para financiar los planes de reforma y mejoramiento de la calidad de las universidades nacionales con recursos adicionales al presupuesto ordinario (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad-FOMEC).

• El *Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores* de las universidades nacionales impulsa la carrera académica integrada y el aumento de la dedicación docente, estimulando una mayor participación en actividades de investigación. Para ello otorga fondos adicionales que premian el mayor rendimiento del trabajo académico de los docentes-investigadores. Los beneficiarios del Programa de Incentivos son los docentes que participan en proyectos de investigación, los que tienen que estar evaluados y aprobados por entidades habilitadas que cuenten con jueces externos.

El Programa de Incentivos cuenta con una asignación presupuestaria de \$70 millones anuales. En 1997 se asignaron incentivos a 18.000 docentes, que investigan en 32 universidades nacionales y desarrollan 6.000 proyectos de investigación.

Es una estrategia que permite avanzar en la evaluación en el interior del sistema, discriminando calidades y reconociendo y premiando la excelencia.

• El *Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC)* es otro de los instrumentos a través del cual se canalizan recursos adicionales a las universidades para el logro de objetivos específicos. Es un fondo concursable destinado a apoyar financieramente procesos de reforma y mejoramiento de la calidad de las universidades nacionales, a través de proyectos elaborados por las instituciones, que son seleccionados previa evaluación de su calidad, pertinencia e impacto a través de Comités de Pares evaluadores. Los recursos con los que cuenta el programa ascienden a \$240 millones a distribuir en cinco años, y provienen, en parte, de un préstamo otorgado por el Banco Mundial al Gobierno argentino. En 1998 se destinaron al FOMEC fondos adicionales del presupuesto nacional, que se espera incrementar para sustituir parcialmente los fondos externos.

Los objetivos prioritarios del FOMEC son:

Apoyo a las reformas académicas: modernización de planes de estudio, creación de ciclos articulados, departamentalización, etc.

Mejora de la calidad de la enseñanza: capacitación de docentes, modernización del equipamiento, consolidación de posgrados, etc.

Búsqueda de mayor eficacia y eficiencia en los procesos de formación académica.

Desde la creación del programa, en 1995, se han aprobado 329 proyectos, pertenecientes a 34 universidades, por un total de \$175,2 millones.

- *Se otorgaron 1.700 becas de posgrado para jóvenes profesores.*
- *Se brindó apoyo a 37 bibliotecas centrales de universidades o de facultades.*
- *Se invirtieron 76,4 millones de pesos en equipamiento, \$18,8 millones en bibliografía y \$80 millones en recursos humanos.*
- *Se apoyó al 80% de los posgrados acreditados.*

El FOMEC es un instrumento novedoso para financiar las transformaciones estructurales de las universidades y permitir el mejoramiento de la calidad y de la eficiencia en las instituciones.

Es un mecanismo transparente y participativo, a través del cual se impulsa una nueva relación entre el Estado y las universidades, basada en la evaluación y en el financiamiento orientado al logro de objetivos compartidos.

c) Eficiencia y equidad en la asignación de recursos

El sistema universitario público en Argentina es financiado casi enteramente por el Estado. Tradicionalmente el presupuesto se distribuía entre las universidades a través de la Ley de Presupuesto, sobre la base de la participación histórica de cada universidad y sin considerar cuestiones de eficiencia y equidad ni indicadores objetivos que reflejaran la situación particular de cada institución. Este mecanismo de distribución presupuestaria no dejaba margen para la introducción de incentivos tendientes a mejorar la eficacia de las actividades universitarias y a corregir las disparidades regionales existentes.

A partir de 1993, se crearon nuevos mecanismos orientados a fortalecer el financiamiento del sistema, maximizar el uso de los recursos públicos, fomentar la autarquía financiera de las universidades y utilizar el presupuesto como una herramienta destinada a promover las transformaciones deseadas. Paralelamente al

incremento de los recursos estatales destinados a las universidades, comenzó a implementarse un *Nuevo Sistema de Asignación Presupuestaria* que tiene en cuenta y estimula la eficiencia y los resultados logrados por las universidades.

El Nuevo Sistema de Asignación Presupuestaria combina mode-los objetivos para la asignación de recursos para el desarrollo de la enseñanza con esquemas contractuales que regulan las asignaciones específicas, como las inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación docente.

Para la distribución de los recursos se tiene en cuenta el desempeño de las instituciones frente a indicadores de eficiencia y equidad, tales como las relaciones egresados/ingresantes, auxiliares/profesores y las materias aprobadas por alumno anualmente.

- Desde 1997 todos los recursos presupuestarios incrementales se distribuyen a través de mecanismos de este tipo, lo cual marca un claro punto de inflexión en el sistema de asignación de recursos.
- En 1998 los recursos incrementales que se asignan conforme a estas modalidades significan un 17% del presupuesto universitario proveniente del crédito público.
- Se busca además que los criterios de eficiencia sean adecuadamente complementados con indicadores de calidad, promoviendo experiencias focalizadas y apoyando programas que se destaque por su nivel de excelencia.

Los recursos incrementales destinados a cada una de las universidades surgen de la aplicación de fórmulas que permiten aumentar la equidad en la distribución interinstitucional del financiamiento. La asignación de los fondos se realiza por medio de sistemas contractuales, por lo que las transferencias están condicionadas al establecimiento de acuerdos entre la Secretaría de Políticas Universitarias y las Universidades Nacionales, en los que éstas se comprometen a garantizar una correcta y eficiente aplicación de los recursos y una mejora en la prestación del servicio educativo, atendiendo a las prioridades fijadas por las instituciones, sobre la base de programas con metas explícitas y auditables.

Esta nueva metodología de asignación de fondos está basada en el principio de corresponsabilidad, en donde se asegura el financiamiento de los proyectos propuestos por las universidades y el mejor cumplimiento de las metas implicadas.

d) El mejoramiento de la información y de la gestión

El proceso de transformación de la educación superior requiere el mejoramiento de los sistemas de gestión y de manejo y producción de la información que sirva como base para la coordinación, el planeamiento y la toma de decisiones, tanto por parte del Ministerio como por parte de las universidades.

Hasta 1993, tanto el Gobierno como las universidades carecían de los elementos necesarios para mejorar su gestión administrativa y académica, la calidad de la información generada y, por lo tanto, la productividad del sector. Las políticas implementadas para revertir esta situación abarcan la producción, la comunicación y la sistematización de información sobre el sistema universitario, sobre la base de instrumentos como los siguientes:

El *Sistema de Información Universitaria (SIU)*, que desarrolla y pone a disposición de las universidades un sistema informático (compuesto por varios módulos) que permite mejorar la gestión académica y administrativa y producir información estadística para la toma de decisiones.

Sistemas informáticos desarrollados:

- **Sistema económico, presupuestario y financiero.**
- **Sistema de gestión de personal.**
- **Sistema de consolidación económica y financiera.**
- **Sistema académico.**

Paralelamente con el SIU, se ha puesto en marcha una *Red de Interconexión Universitaria (RIU)*, que es el soporte material que permite el intercambio de información al interconectar el conjunto de las Universidades Nacionales entre sí y con el Ministerio de Educación. La red posibilita la articulación de la comunicación a nivel nacional y la obtención de información actualizada sobre el Sistema Universitario Nacional. La RIU se integra con otras redes similares en Argentina y tiene conexión con el exterior, formando parte de Internet.

El *Programa de Estadísticas Universitarias* elabora y publica estadísticas básicas sobre las Universidades. Este Programa ha logrado:

- Reconstruir las series históricas de estadísticas básicas de alumnos, ingresantes y egresados.
- Elaborar un conjunto de indicadores básicos de desempeño de las Universidades Nacionales, que ha permitido detectar algunos problemas críticos: bajas tasas de egreso, concentración

de la demanda en unas pocas carreras, decrecimiento de las ciencias básicas y tecnológicas, etc.

- Realizar por primera vez un censo nacional de estudiantes universitarios y obtener una caracterización exhaustiva de la población estudiantil de las Universidades Nacionales.
- Publicar, también por primera vez, un documento dedicado exclusivamente a ofrecer información sobre todas las Universidades Privadas.
- Comenzar la publicación sistemática de un Anuario de Estadísticas Universitarias en el que se incluye información sobre la población estudiantil, el personal de las universidades, el presupuesto universitario, así como sobre los diversos programas de la Secretaría.

Actualmente se está perfeccionando el sistema de estadísticas continuas y se están desarrollando nuevos indicadores para la toma de decisiones.

e) Equidad en el acceso y avance en la educación superior

Uno de los problemas de nuestra educación superior es la escasa equidad en el acceso y avance de los estudiantes en el sistema, que en parte es consecuencia de las políticas de gratuidad total, de los efectos de la selección implícita que conlleva el ingreso irrestricto a las universidades y de la carencia de sistemas de becas y créditos suficientemente extendidos para garantizar el acceso y avance sobre la base del mérito.

La Ley de Educación Superior introdujo modificaciones en cuanto al financiamiento universitario orientadas a producir mejoras en este sentido. Por un lado, la Ley establece con claridad la responsabilidad indelegable que le cabe Estado en el sostenimiento de la educación superior de carácter público. Por otro lado, elimina la prohibición que existía para el cobro de aranceles en los estudios de grado, estableciendo que es potestad de cada universidad el cobro o no de los mismos. Las universidades estatales pueden ahora arancelar los estudios, y si lo hacen, deben destinar estos recursos a becas y apoyo didáctico para los estudiantes de menores recursos, cumpliéndose con los principios de "gratuidad y equidad" que marcan la Constitución Nacional y la Ley Federal de Educación.

Aunque los avances en este sentido son lentos en la mayoría de las universidades, en las de más reciente creación se han establecido aranceles o contribuciones de los estudiantes que ayudan al sostenimiento de las instituciones y al fomento de la equidad.

Por otra parte, independientemente de las acciones implementadas por las universidades, el Ministerio de Cultura y Educación ha creado un *Programa Nacional de Becas Universitarias* y un *Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación Superior*, que tiende a garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades en los estudios superiores.

- **El Programa Nacional de Becas Universitarias promueve simultáneamente la equidad y el buen desempeño académico, mediante un sistema de asignación objetivo y transparente.**
 - **Los becarios pertenecen a familias de muy bajos ingresos, y un alto porcentaje de los padres está desocupado o subocupado.**
 - **Los estudiantes que han obtenido becas son buenos alumnos: el 50% o más tiene promedio superior a 8 puntos.**
-
- **El Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación Superior complementa el Programa de Becas, basándose también en criterios de objetividad y transparencia para su otorgamiento.**
 - **Está destinado a estudiantes de carreras de más de dos años de duración, en universidades o institutos terciarios reconocidos.**
 - **Ofrece créditos por un monto de \$2.000 anuales, que el estudiante debe devolver luego de egresado.**

f) Ampliación de las oportunidades educativas de nivel superior

Frente a la expansión de la matrícula en las universidades públicas y su alta concentración en algunas carreras profesionales tradicionales de larga duración (abogacía, contador público, medicina), el Gobierno está promoviendo la ampliación y diversificación de la oferta de educación superior a través del desarrollo de nuevas instituciones terciarias no universitarias de formación técnica y profesional y el crecimiento de la oferta universitaria tanto pública como privada.

La Ley de Educación Superior incorporó la posibilidad de crear *Colegios Universitarios*, acreditados por una o más universidades y articulados con ellas, destinados a ofrecer carreras cortas, flexibles y/o a término. Se trata de promover nuevas alternativas para dar respuesta a la demanda de educación superior, especialmente en poblaciones que no cuentan con oferta de carreras universitarias.

También se promueve la creación de *Institutos Tecnológicos* que cuenten con una oferta orientada a satisfacer los requerimientos de recursos humanos calificados que el proceso de desarrollo y transformación socioeconómica plantean, incrementando las posibilidades de inserción de los graduados en el mercado laboral.

La diversificación de la oferta de educación superior es esencial para asegurar en el mediano plazo un acceso masivo a una formación postsecundaria de calidad.

Dada la prioridad que se le otorga a esta diversificación, el Gobierno ha puesto en marcha el *Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU)*, que cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Está destinado a promover la creación de modelos innovadores de institutos tecnológicos, que respondan a las demandas del sector productivo de la región en la que se inserten y en cuyo diseño, dirección y financiamiento participen activamente autoridades gubernamentales de nivel local (provincial o municipal), sectores privados de la industria, el comercio o los servicios y, eventualmente, las universidades.

Asimismo, desde el Gobierno se eliminaron las restricciones que limitaban el desarrollo de la oferta universitaria privada, que sin embargo debe sujetarse a procesos de evaluación externa y acreditación que garanticen adecuados niveles de calidad.

Se ha avanzado de esta forma en la conformación de un sistema de educación superior diversificado y complejo, con creciente capacidad de dar respuesta a las diferentes demandas educativas de la población.

g) Articulación de las universidades con el sector productivo

En esta etapa del desarrollo histórico, el conocimiento se ha constituido en elemento central del nuevo paradigma social y productivo vigente, resignificando el valor social de la educación en general y de la educación superior en particular. En este marco, a las instituciones de educación superior les cabe un papel central tanto en la formación de recursos humanos como en la producción, adaptación y difusión del conocimiento necesario para potenciar el desarrollo socioeconómico.

Para que la educación superior pueda cumplir eficazmente con esta misión, se han impulsado acciones tendientes a incrementar su pertinencia. En el campo de la investigación y la extensión se promueve la vinculación de las universidades con el sector productivo y con las organizaciones sociales de ca-

da región, favoreciéndose los desarrollos que atiendan a las necesidades del contexto local y regional en el que cada institución se desenvuelve.

Esta vinculación es ahora creciente y permite incrementar los recursos propios generados por las instituciones, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiamiento y al incremento del financiamiento global del sector. Las principales acciones emprendidas por el Gobierno para impulsar la articulación con el sector productivo y el incremento en la generación de recursos propios han sido:

- Modificación del *Régimen Económico-Financiero* de las Universidades Nacionales, que eliminó las restricciones existentes, para las universidades públicas, en materia de generación y administración de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional.
- Inclusión de una cláusula en la Ley de Educación Superior que prohíbe limitar los aportes estatales en atención a la generación de ingresos que las universidades pudieran tener por cualquier concepto.

Como resultado, en la actualidad aproximadamente el 10% del presupuesto universitario total proviene de recursos propios generados por las instituciones.

Por otro lado, en 1994 se creó, en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias, el *Programa de Vinculación Tecnológica en las Universidades*, que recientemente fue transferido a la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación. Este programa tiene como principal objetivo desarrollar acciones que ayuden al mejoramiento de la vinculación entre las Universidades y el sector productivo, promoviendo la innovación tecnológica y sus aplicaciones al desarrollo socioeconómico.

Algunos resultados del Programa de Vinculación Tecnológica:

- Creación de Unidades de Vinculación Tecnológica en las Universidades.
- Capacitación de gestores de proyectos de Vinculación Tecnológica.
- Relevamiento y difusión de la oferta tecnológica de las Universidades.
- Promoción de diversas formas de Vinculación Tecnológica, como los microemprendimientos y la creación de incubadoras de empresas.
- Difusión de los beneficios de la Ley de Innovación Tecnológica.

h) Articulación y coordinación del sistema

El sistema de educación argentino se ha caracterizado tradicionalmente por su heterogeneidad y escasa articulación interna y externa. Existen universidades e institutos universitarios de gestión estatal y de gestión privada, que tienen distintos tamaños y antigüedad y que cuentan con una oferta de carreras muy variada y de diversos niveles de calidad. En algunos casos existen superposiciones de carreras similares dictadas en universidades de la misma región, lo que disminuye la eficacia de los recursos invertidos en el sistema.

Para mejorar la articulación y coordinación del sistema se han desarrollado diversas iniciativas:

- En 1993, se crearon los *Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES)*, con el objetivo de coordinar las acciones entre las universidades de una misma región y de articular los planes y programas que ellas se proponen desarrollar con organismos públicos y privados de su zona. Los CPRES están formados por representantes de las universidades nacionales y privadas y por representantes de los gobiernos provinciales.

Los CPRES desarrollan programas de articulación entre las instituciones universitarias de la región, promueven la organización de posgrados regionales y elaboran programas de vinculación tecnológica a nivel regional.

La Ley de Educación Superior rescata el papel de los organismos de coordinación existentes, como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conformado por los rectores de las Universidades Nacionales, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Estas dos entidades, junto con representantes de los CPRES y un representante del Consejo Federal de Cultura y Educación, integran un ámbito nuevo y superior de coordinación: el *Consejo de Universidades (CU)* que es presidido por el Ministro de Cultura y Educación de la Nación.

Principales funciones del Consejo de Universidades:

- **Proporcionar la definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario.**
- **Promover la cooperación entre las instituciones universitarias.**
- **Impulsar la adopción de pautas para la coordinación del sistema universitario.**
- **Acordar con el Consejo Federal de Cultura y Educación criterios y pautas para la articulación entre las instituciones educativas de nivel superior.**

La necesidad de avanzar en la aplicación de la Ley de Educación Superior y de profundizar las reformas estratégicas en marcha genera una serie de prioridades que será necesario abordar en los próximos años.

Fortalecimiento del sistema de educación superior

La tendencia al aislamiento y la escasa asociación entre universidades e incluso, entre facultades de una misma universidad, atenta contra la idea misma de sistema universitario. En la Argentina se ofrece, por ejemplo, un número muy alto de títulos de licenciaturas, que expresa la superposición de ofertas, al tiempo que quedan vacantes áreas estratégicas del conocimiento. Este es un campo en el que la autonomía de las universidades, si no se combina con esfuerzos de articulación y cooperación, juega en contra de la racionalidad del sistema. Queda por desarrollar, entonces, una cultura institucional que promueva una mayor cooperación y no sólo la competencia entre universidades.

El fortalecimiento de la coordinación del sistema puede contribuir a resolver las disparidades regionales y disciplinarias actuales, introduciendo criterios racionales para el ordenamiento de la oferta de programas de las diferentes instituciones de una región y para apoyar el desarrollo de áreas disciplinarias vacantes. Esto permitiría además hacer un mejor uso de los recursos financieros, físicos y humanos disponibles.

La respuesta al desafío consiste, entonces, en mejorar y profundizar el accionar de las organizaciones e instancias de coordinación existentes.

Sistemas de acceso a la universidad y articulación con el nivel medio

La carencia de adecuadas políticas de admisión a la universidad así como la relativa escasez de otras oportunidades educacionales llevan a una gran cantidad de graduados del nivel secundario a inscribirse en las universidades. Muchos de ellos no están suficientemente motivados o preparados para llevar a cabo estudios universitarios, por lo que los niveles de deserción y repitencia en los primeros años de estudio son muy altos. Esto afecta severamente la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y limita las posibilidades de ofrecer educación superior de calidad.

La evidencia muestra que los resultados en términos de tasas de egreso están en parte asociados a la existencia de sistemas de admisión a la universidad. Esto plantea la necesidad de lograr una adecuada articulación con el nivel medio, conciliando el derecho a completar la educación que deriva de la igualdad de oportunidades con la búsqueda de una creciente calidad académica.

De acuerdo con la legislación vigente, el régimen de admisión de los estudiantes es establecido por las universidades y varía de una a otra: actualmente coexisten en todo el país varios sistemas y, aunque esto es un signo positivo porque demuestra el pluralismo y la diversidad existente en el sistema universitario, ocasiona una negativa dispersión de esfuerzos y no ha posibilitado aún, salvo en el caso de algunas pocas instituciones, el mejoramiento de los índices de graduación en la totalidad del sistema.

Por ello, el debate y la implementación de políticas relativas a los sistemas de admisión a la universidad y su articulación con el nivel medio es una prioridad inmediata para la transformación de la educación superior. Desde el Gobierno se promueve el diseño y la experimentación de un Sistema de Articulación entre el Nivel Medio y la Universidad, que prevé, al término de la educación media o polimodal, la realización de una prueba de aptitudes y conocimientos, de carácter nacional, que permita otorgar a quienes la aprueben un Certificado Nacional de Aptitudes Básicas. Dicho certificado podrá ser utilizado por las universidades como un elemento de juicio adicional para el ingreso al nivel superior, de acuerdo con los criterios y exigencias de admisión que ellas establezcan.

Reformas curriculares para el incremento de la pertinencia de la educación superior

Frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que están teniendo lugar en la actualidad (difusión de las nuevas tecnologías, acceso masivo a la información y rápida difusión y adopción de los conocimientos), la educación superior debe adaptar la formación que ofrece para producir los graduados que la sociedad actual requiere.

Los cambios ocurridos en el mundo del trabajo acortan los períodos de utilidad de las competencias profesionales transmitidas en los programas tradicionales de las universidades y la velocidad con la que ocurren estos cambios genera un marco de incertidumbre respecto de las tareas que desarrollarán los futuros graduados. Las principales características que el mundo actual del trabajo requiere de los egresados son la versatilidad, la capacidad de estar abierto al cambio y de generarla, de identificar y resolver problemas y de analizar, evaluar y decidir entre múltiples alternativas, ponderando la validez relativa de cada solución en función del contexto y del momento del que se trate.

Para formar técnicos, profesionales y académicos con las habilidades mencionadas, se requieren reformas pedagógicas y

curriculares que favorezcan una organización de la educación superior diversificada y flexible, que facilite el acceso al sistema educativo en distintos momentos de la vida de la persona, en un modelo que permita combinar períodos de educación y períodos de trabajo. La organización curricular basada en la estructuración de las carreras en ciclos, que partan de una sólida formación básica, amplia e interdisciplinaria, para luego abordar un período de especialización articulado con el espacio laboral en los últimos años de la formación constituye una alternativa superadora de los modelos tradicionales.

Muchas instituciones han iniciado procesos integrales de reforma curricular, pero éstos aún no abarcan el conjunto del sistema. Extender y profundizar estas iniciativas resulta imprescindible para que las instituciones adecuen su oferta a las demandas y necesidades económicas, sociales y culturales de la sociedad actual.

Fortalecimiento de la gestión académica

El desarrollo de una gestión moderna por parte de la dirigencia universitaria argentina es más bien excepcional. Si para un buen liderazgo universitario es necesario una adecuada combinación entre los aspectos académicos, administrativos y políticos del sector de conducción, en el caso argentino el peso de lo político es muchas veces exagerado. La educación se convierte entonces en un campo de batalla de enfrentamientos partidarios, que atenta contra la calidad y la eficacia en el gobierno de las universidades.

Aunque se han realizado avances en este tema, no siempre visibles, sobre todo a partir de la implementación de la Ley de Educación Superior y la adecuación de los estatutos universitarios a dicha Ley, queda aún mucho para hacer en términos de la profesionalización del gobierno y la gestión de las universidades.

Transformación del régimen laboral y jerarquización de la actividad universitaria

Las políticas de incentivos al desarrollo integrado de la docencia y la investigación han permitido avanzar en la jerarquización de la actividad académica, promoviendo una mayor productividad del trabajo de los docentes investigadores.

Es necesario continuar con la revisión de las pautas actuales del trabajo académico y con la transformación del régimen laboral vigente. Esto permitirá, a su vez, rejerarquizar la labor académica para que el sistema universitario logre atraer a los mejores graduados con vocación para dedicarse a esta tarea.

Anexo Estadístico

1 ALUMNOS

CUADRO 1
Alumnos de
Universidades
Nacionales
1997

Universidad	Alumnos
Total	860.661
Universidad de Buenos Aires	185.322
Universidad Nacional de Córdoba	93.194
Universidad Nacional de La Plata	76.355
Universidad Tecnológica Nacional	64.975
Universidad Nacional de Rosario	62.164
Universidad Nacional del Nordeste	45.548
Universidad Nacional de Tucumán	44.125
Universidad Nacional de Lomas de Zamora	27.356
Universidad Nacional de Cuyo	23.229
Universidad Nacional del Litoral	20.825
Universidad Nacional de Mar del Plata	20.144
Universidad Nacional del Comahue	17.803
Universidad Nacional de Salta	15.490
Universidad Nacional del Sur	15.064
Universidad Nacional de La Matanza	13.746
Universidad Nacional de Luján	12.839
Universidad Nacional de San Juan	12.587
Universidad Nacional de San Luis	11.726
Universidad Nacional de Misiones	11.100
Universidad Nacional de Río Cuarto	10.924
Universidad Nacional de Entre Ríos	9.344
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco	9.241
Universidad Nacional de Catamarca	8.872
Universidad Nacional de La Rioja	8.864
Universidad Nacional de Jujuy	7.805
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.	7.375
Universidad Nacional de La Pampa	6.237
Universidad Nacional de Santiago del Estero	4.685
Universidad Nacional de Formosa	3.819
Universidad Nacional de la Patagonia Austral	3.383
Universidad Nacional de Quilmes	2.485
Universidad Nacional de General San Martín	1.473
Universidad Nacional de General Sarmiento	1.354
Universidad Nacional de Lanús	639
Universidad Nacional de Villa María	569

(Datos provisorios)

CUADRO 2

**Alumnos de Universidades
Privadas 1997**

Alumnos

Total	135.695
Universidad de Morón	15.443
Universidad Argentina de la Empresa	13.284
Universidad Argentina John F. Kennedy	13.168
Universidad del Salvador	12.876
Pontificia Univ. Católica Arg. Sta. María de los Bs. As.	10.892
Universidad de Belgrano	9.768
Universidad de Palermo	4.970
Universidad Católica de Santa Fe	4.588
Universidad Católica de Córdoba	4.393
Universidad Católica de La Plata	4.233
Universidad Católica de Salta	4.190
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino	3.328
Universidad de Mendoza	3.261
Universidad Católica de Santiago del Estero	2.874
Universidad CAECE	2.452
Universidad Católica de Cuyo	2.419
Universidad del Museo Social Argentino	2.315
Universidad Blas Pascal	2.256
Universidad del Aconcagua	2.195
Inst. Univ. de Cs. de la Salud de la Fundación Barceló	1.908
Univ. de la Frat. de Agrup. Sto. Tomás de Aquino	1.642
Universidad Juan Agustín Maza	1.613
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	1.563
Universidad Champagnat	1.307
Instituto Tecnológico de Buenos Aires	1.288
Universidad Abierta Interamericana	832
Universidad Adventista del Plata	791
Universidad Austral	760
Universidad de Concepción del Uruguay	744
Universidad Torcuato Di Tella	599
Universidad de Flores	571
Universidad del Cine	484
Universidad de la Marina Mercante	477
Universidad Maimónides	430
Universidad de San Andrés	410
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano	406
Universidad de la Cuenca del Plata	398
Universidad Atlántida Argentina	252
Inst. Univ. de Cs. Bioméd. de la Fund. Univ. Dr. Favaloro	167
Universidad Hebreo Argentina Bar Ilan	148

(Datos provisorios)

CUADRO 3
Evolución del número
de alumnos universitarios
1992-1997

Año	Universidades Nacionales	Universidades Privadas	Total
1992	698.561	105.062	803.623
1993	674.868	112.837	787.705
1994	719.671	124.749	844.420
1995	766.847	126.981	893.828
1996	812.308	130.155	942.463
1997*	860.661	135.695	996.356

* Datos provisorios

GRÁFICO 1
Universidades Nacionales
Evolución del número de alumnos
1992-1997

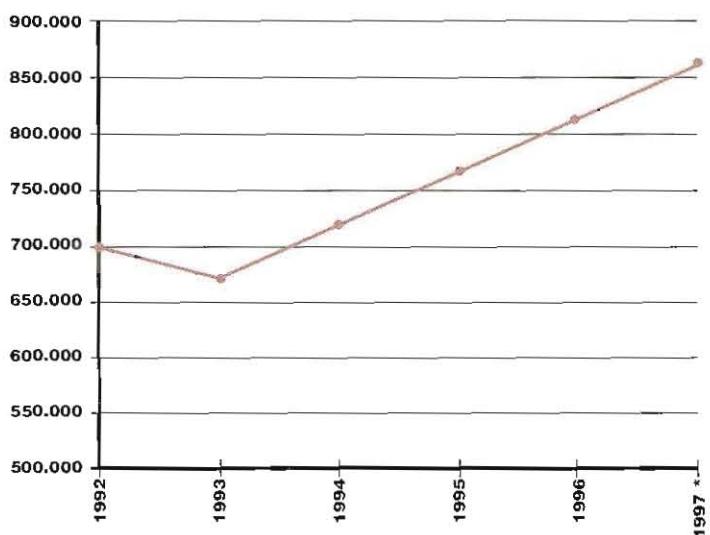
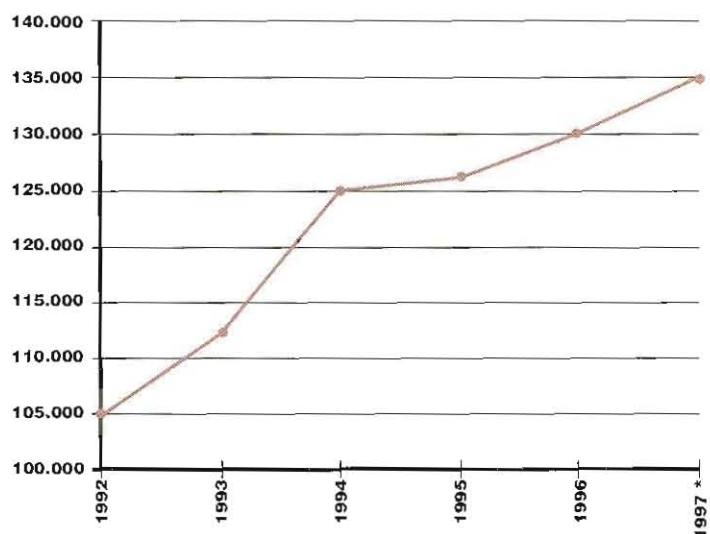


GRÁFICO 2
Universidades Privadas
Evolución del número de alumnos
1992-1997



CUADRO 4
Alumnos según rama de estudio
1997

Rama de estudio

Total

Ciencias Básicas y Tecnológicas
 Ciencias Sociales
 Ciencias Humanas
 Ciencias Médicas

Total

996.356
 312.197
 427.081
 132.019
 125.059

Nacionales

860.661
 283.158
 342.543
 115.329
 119.631

Privadas

135.695
 29.039
 84.538
 16.690
 5.428

Datos provisorios

GRÁFICO 3
Universidades Nacionales y Privadas
Alumnos según rama de estudio
1997

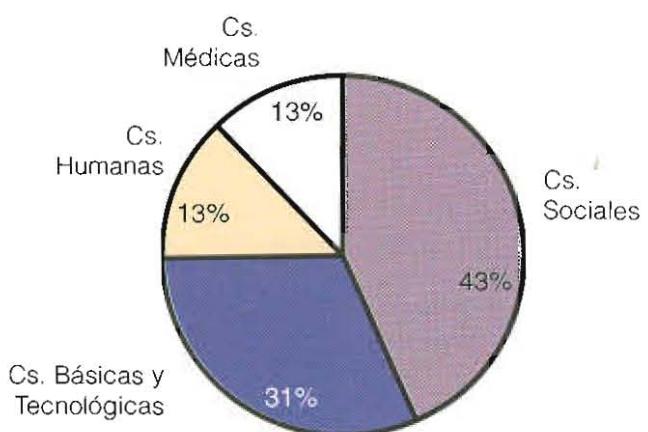


GRÁFICO 4
Universidades Nacionales
Alumnos según rama de estudio
1997

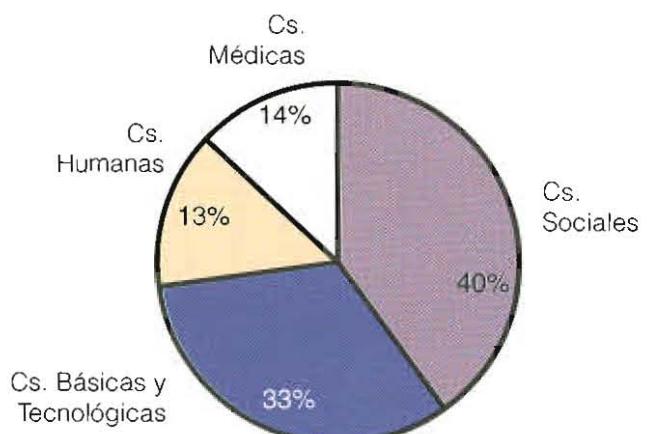
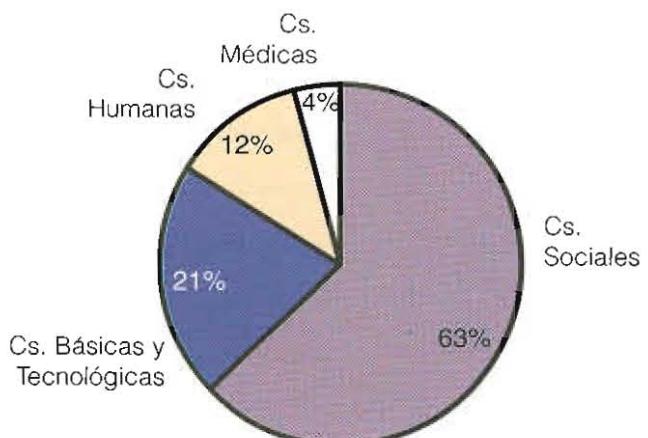


GRÁFICO 5
Universidades Privadas
Alumnos según rama de estudio
1997



2 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Anexo Estadístico

GRÁFICO 6
Universidades Nacionales
Evolución del número total
de Docentes Investigadores
que perciben incentivo
1994-1997

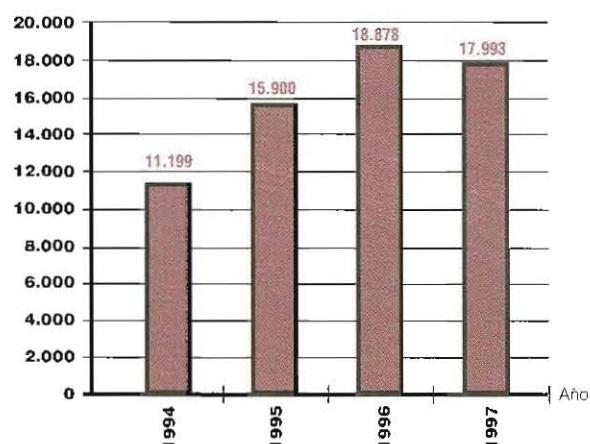


GRÁFICO 7
Planta docente total y
Docentes Investigadores
incentivados
1997

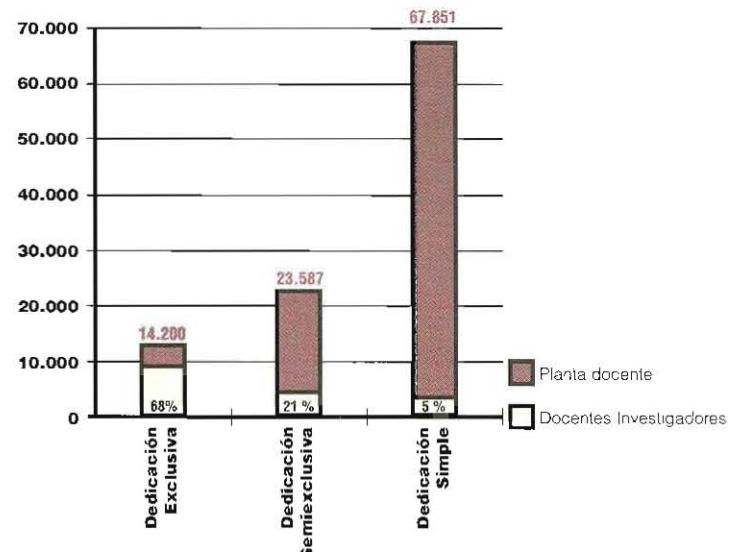
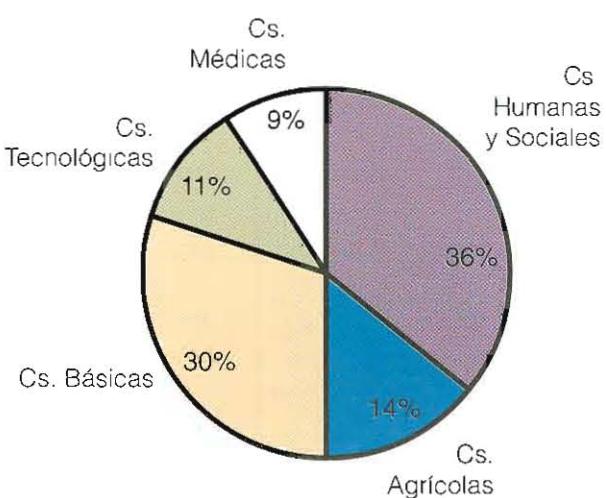


GRÁFICO 8
Distribución de proyectos de
investigación que se desarrollan
bajo el Programa de Incentivos,
según área disciplinaria
1997



CUADRO 5
Universidades Nacionales
Planta docente total y Docentes Investigadores
que perciben incentivo, según dedicación
1997

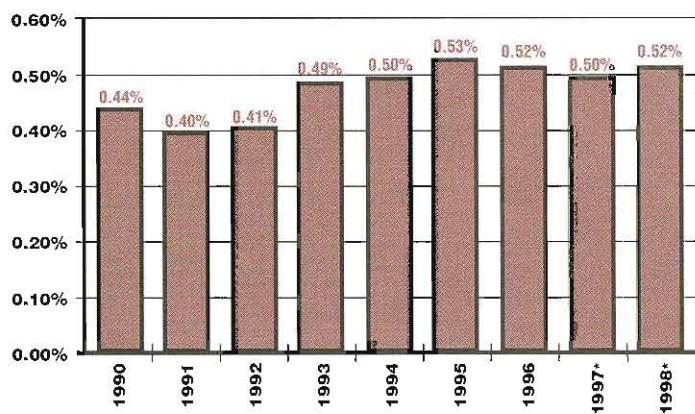
Universidad	Planta Docente Total	Incentivados	% Incentivados sobre el total	Dedición Exclusiva Total	Incentivados	% Incentivados sobre el total	Dedición Sem. Exclusiva Total	Incentivados	% Incentivados sobre el total	Dedición Simple Total	Incentivados	% Incentivados sobre el total
Total	109,516	17,993	16.4	14,200	9,695	68.3	23,587	4,962	21.0	67,851	3,336	4.9
UBA	21,228	3,262	15.4	2,399	1,765	73.6	2,829	554	19.6	16,600	943	5.9
Catamarca	1,273	301	23.6	255	176	69.0	411	101	24.6	279	24	8.6
Centro	1,911	489	25.6	425	315	74.1	263	92	35.0	1,180	82	6.9
Comahue	1,699	443	26.1	497	296	59.6	504	94	18.7	695	53	7.6
Córdoba	7,044	1,394	19.8	883	643	72.8	2,563	469	18.3	3,598	282	7.8
Cuyo	3,914	780	19.9	341	245	71.8	1,810	353	19.5	1,426	182	12.8
Entre Ríos	1,511	159	10.5	104	119	114.4	776	36	4.6	588	4	0.7
Formosa	750	90	12.0	80	31	38.8	226	34	15.0	444	25	5.6
Gral San Martín	388	59	15.2	34	17	50.0	188	33	17.6	105	9	8.6
Jujuy	669	186	27.8	137	80	58.4	384	97	25.3	148	9	6.1
La Matanza	1,263	182	14.4	345	117	33.9	535	55	10.3	342	10	2.9
La Pampa	1,233	285	23.1	185	128	69.2	307	95	30.9	736	62	8.4
La Patagonia Austral*	404	91	22.5	130	67	51.5	305	11	3.6	106	13	12.3
La Patagonia S. J. B	1,817	144	7.9	146	71	48.6	537	38	7.1	1,134	35	3.1
La Plata	9,277	2,055	22.2	1,007	853	84.7	1,851	773	41.8	6,419	429	6.7
La Rioja	875	76	8.7	120	35	29.2	303	32	10.6	333	9	2.7
Litoral	3,191	697	21.8	339	324	95.6	946	261	27.6	1,226	112	9.1
Lomas de Zamora*	2,016	62	3.1	85	39	45.9	149	14	9.4	1,173	9	0.8
Luján	1,189	214	18.0	220	117	53.2	280	59	21.1	671	38	5.7
Mar del Plata	3,880	782	20.2	667	507	76.0	783	134	17.1	2,409	141	5.9
Misiones	1,638	258	15.8	243	140	57.6	642	87	13.6	753	31	4.1
Nordeste	3,827	247	6.5	275	128	46.5	375	45	12.0	2,885	74	2.6
Quilmes	s/d	61	s/d	s/d	54	s/d	s/d	6	s/d	s/d	1	s/d
Río Cuarto	1,348	700	51.9	602	482	80.1	397	164	41.3	226	54	23.9
Rosario	7,062	1,127	16.0	444	449	101.1	1,589	359	22.6	4,218	319	7.6
Salta	1,193	452	37.9	400	289	72.3	582	145	24.9	211	18	8.5
San Juan	2,636	606	23.0	831	387	46.6	994	165	16.6	811	54	6.7
San Luis	1,396	521	37.3	681	429	63.0	437	76	17.4	197	16	8.1
Santiago del Estero	896	172	19.2	261	126	48.3	253	41	16.2	318	5	1.6
Sur	1,752	622	35.5	471	396	84.1	262	107	40.8	918	119	13.0
Tucumán	3,885	1,052	27.1	1,229	711	57.9	1,795	305	17.0	769	36	4.7
UTN	18,170	424	2.3	266	159	59.8	510	127	24.9	16,931	138	0.8

* Información del año 1996

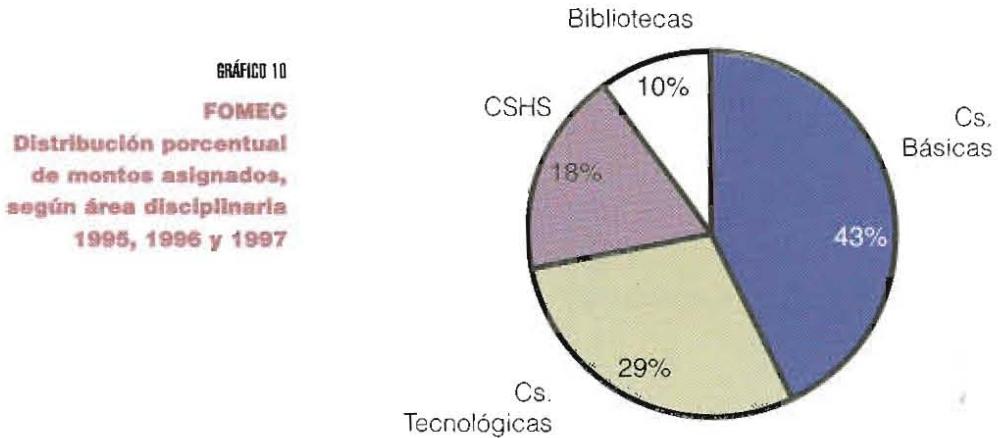
3

RECURSOS

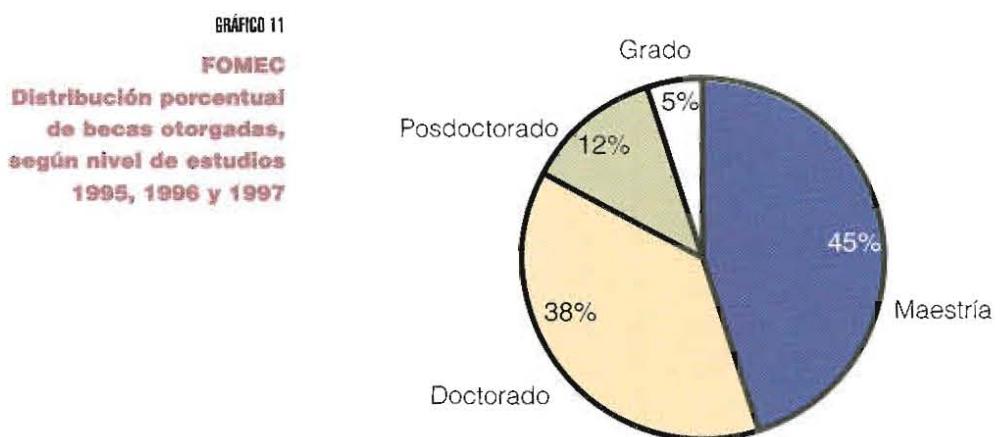
GRÁFICO 9
Participación porcentual
del presupuesto de las
Universidades Nacionales
en el Producto Bruto Interno
1990-1998



*Datos provisorios de PBI



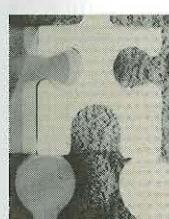
\$175 millones



1.780 becas

C O N T E N T S

1 • THE GUIDELINES OF HIGHER EDUCATION REFORM	46
2 • HIGHER EDUCATION IN ARGENTINA AT THE END OF THE CENTURY	48
3 • PROBLEMS AND CHALLENGES OF THE NINETIES	53
4 • MAJOR GOALS	54
5 • STRATEGIES AND PROGRAMS IMPLEMENTED	55
a- A NEW REGULATORY FRAMEWORK: THE HIGHER EDUCATION ACT	55
b- IMPROVEMENTS IN UNIVERSITY QUALITY	56
c- EFFICIENCY AND EQUITY IN THE ALLOCATION OF RESOURCES	60
d- IMPROVEMENTS IN MANAGEMENT AND INFORMATION	62
e- EQUITY IN ACCESS AND PROGRESS IN HIGHER EDUCATION	63
f- EXPANSION OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES AT HIGHER LEVEL	64
g- CO-ORDINATION BETWEEN UNIVERSITIES AND THE PRODUCTIVE SECTOR	65
h- CO-ORDINATION OF THE SYSTEM	67
6 • PRIORITIES FOR THE FUTURE	68
STRENGTHENING OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM	68
SYSTEMS OF ACCESS TO UNIVERSITIES AND CO-ORDINATION WITH SECONDARY SCHOOL	68
CURRICULAR REFORM AIMED AT INCREASING THE RELEVANCE OF HIGHER EDUCATION	69
STRENGTHENING OF ACADEMIC MANAGEMENT	70
TRANSFORMATION OF THE LABOUR REGIME AND RE-VALUING OF UNIVERSITY ACTIVITY	70
STATISTICAL APPENDIX	71



Higher Education in Argentina

A process of on-going change

There exists today right across the world a broad consensus that higher education should take into account the need for far-reaching changes if it is to meet the vast challenges set by the end of this century, which will probably be intensified in the next one.

The objectives of these changes are both common and universal: they involve improving the quality of education, research and services offered; focusing on the social relevance of the knowledge generated and transmitted; ensuring equity so as to make effective the principle of equal opportunities and the challenge of achieving all these goals efficiently.

But the particular characteristics of the educational system of each country and its specific problems make them follow different ways of bringing about changes. Furthermore, their choices are linked to cultural traditions, institutional conditions, economic restrictions and political options.

This document aims to describe the current situation of higher education in Argentina and present a general outline of the strategy adopted by this country to transform its higher education system, which has been a high priority task undertaken since the beginning of this decade.

Beyond the Argentine characteristics, it is important to emphasise that the policies implemented are enshrined within the guidelines which apply to the sector defined by UNESCO. These include:

- *the need to consider higher education as an essential element in the socio-economic and cultural development of every country;*
- *the need to respect institutional autonomy and academic freedom as requisite conditions for the development of higher education, simultaneously promoting greater institutional accountability;*

- *the need to promote an increase in the relevance and quality of the education provided, guaranteeing that merit be the only condition for entry to and progress within the system, and aiming towards the construction of a diversified system that can meet the different educational demands of the population;*
- *the need to take on the commitment to increase public and private resources for the sector, promoting diversification in financing sources and greater efficiency in the use of resources, and improving the management and government systems of the institutions;*
- *the need to reinforce the international dimension of academic activity, fostering the exchange of know-how and the growing inter-relation between the various actors in the institutions in different countries.*

This is a good opportunity to make a balance of five years of university policies, started in 1993 when the Secretariat for University Policies was set up as an specific space in which to deal with higher education issues.

Although many of the initiatives which this document presents have been introduced only recently and it is still too early to try to evaluate their results, the policies that have been carried out allowed for the development of important changes that can now be perceived and which constitute an important base for the continuation of the change process.

Firstly, the issue of higher education has been duly attended: the creation of a Secretariat of State, responsible for the area, created a new area, for discussion, for the co-ordination of the system and for the generation of specific policies. We now have an institutional space with the capacity to design and implement policies for the sector.

Secondly, higher education began to be treated as a State issue: the activity of the Secretariat was directed by the search for consensus with the other actors within the system. The National Inter-University Council and the Council of Private University Rectors are consulted on an on-going basis by the Ministry. The initiatives which are carried out are discussed and agreed with members from the bodies which represent the universities.

Thirdly, transparency in the system functioning and in the management of public policies has improved visibly. The link between the State and the Universities has matured and negotiations are based on a more objective and rational footing in which it is not just a case of applying pressure to obtain results.

Finally, the structural changes achieved in higher education bring us closer to systems in countries which are more advanced in this field. The extension of post-graduate courses to all disciplines and the development of a large range of Master programs will enhance the quality of academic activities which in turn will improve the standard of learning of students. This development also offers the possibility to continue fourth level studies in the country taking high quality accredited programs, when up to only a few years, it was necessary to pursue many subjects in foreign institutes. It goes without saying that the opportunities for taking such studies have substantially grown.

There will be no turning back for the more important modifications introduced during this period, particularly as regards the policies for inter-institutional co-ordination between private and state universities; also those for evaluating and accrediting programs and institutions; and the financing policies associated with programs for institutional development and quality improvement. At the same time, there has also been significant progress as regards making public policy management in higher education more professional and in the area of the production of reliable and transparent information on the higher education system. These are long lasting achievements.

Over the next few years, the challenges pending must be addressed so as to build up a higher education system which involves modern, agile, and flexible institutions able to carry out their activities and meet the high standards of quality and efficiency necessary to enter the twenty-first century and to confront the challenges of knowledge society.

The last 10 years have seen the higher education system experienced significant growth and sustained institutional diversification, although there has also been some deterioration in the academic level of the universities as a result of processes generated by the authoritarian policies of the military governments, the progressive loosening in selection procedures, insufficient resources and their inefficient utilisation.

In the framework of the public finance and economic crisis of the 1980s, the sudden growth in enrolment -particularly as from 1984, as result of the demands for democratisation and the removal of entry restrictions- was not accompanied by a corresponding increase in university financing, which worsened the situation in the system.

The monetary stability reached at the beginning of the 90s together with the recovery in economic growth and improvements in public finances allowed for the implementation of actions aimed at reversing the critical situation in which the system found itself, particularly as regards public sector financing. University funding has grown year after year over the last decade.

Nevertheless, an increase in State resources is not sufficient in itself to transform higher education in the sense of making access more equitable, improving the quality and relevance of academic activities and making efficient use of resources.

As from 1993, the Ministry of Culture and Education defined a series of strategies and initiated a set of programs aimed at achieving the structural transformation of the higher education system. The aim is to move towards a system characterised by a growing capacity for self-regulation, composed of autonomous and self-governing institutions able to manage their own development but which nevertheless accept to submit to external evaluation and accreditation processes which stimulate the institutions concern for quality improvement and accountability.

The State is playing an active role in the management of this process of reform within the guidelines for modernisation and integration which are characteristic of university public policies throughout the continent nowadays. The initiatives developed represent a kind of "indirect regulation" of the system. This does not mean that the State is trying to assume the role of central planner, nor that the development of the system will be left to its

own dynamism, but rather that a series of policies are being implemented to provide incentives for the changes sought without intervening directly in the activities of the institutions.

The transformation of higher education implies a redefinition of the relationship between the State and the Universities. The State is responsible for safekeeping public trust in higher education institutions, guaranteeing standards of quality and excellence for its graduates and ensuring the most efficient use of the resources that society has earmarked for this system. Nevertheless, it is up to the institutions to design and implement the strategies for change needed to improve the quality and relevance of the services they offer, forge closer links with the productive sector, diversify their sources of income, govern and administrate themselves independently and responsibly, showing greater efficiency and transparency in the use of public funds.

Evaluation and financing linked to achieving priority goals are superior mechanisms of regulation than the bureaucratic control and auditing of the institutions since autonomy is maintained while also a responsible use of resources and social accountability is promoted by the State.

The actions taken in this area are basically aimed at favouring changes in the rules of the game, increasing the independence of the institutions while defining priority objectives for the system development and creating mechanisms to make their achievement possible.

In conjunction with different initiatives introduced to promote change, important efforts were made to maintain a systematic and significant increase in state resources allocated to the financing of the national university system which registered an increase of 63% between 1992-1998.

This shows the Government's commitment and the importance it places on higher education, given the strategic value that knowledge has acquired as a core element within the new social, productive and cultural paradigm that is taking shape as this century draws to a close.

Argentina has a diversified and complex higher education system, made up of different kinds of institutions: state and private universities, university-level institutes and tertiary non-university institutions which are largely designed for basic-level teacher training. Currently there are 36 national universities, 43 private ones, 10 university institutes (5 private, 5 public) and some 1.700 tertiary non-university institutes, of which just over half are state-run.

TABLE 1
Number of university institutions

	1998
Total of Argentine University Institutions	89
National Universities	36
National University Institutes	5
Private Universities (<i>permanent authorisation</i>)	22
Private Universities (<i>provisional authorisation</i>)	21
Private University Institutes (<i>permanent authorisation</i>)	2
Private University Institutes (<i>provisional authorisation</i>)	3

Over the last decade the university sector has experienced significant growth with the creation of ten new national universities and a duplication in the number of private ones. Both the private and public sector are highly heterogeneous in terms of the size and age of the institutions, the relative importance of the teaching, research and service functions, the development of post-graduate studies and in the prestige and quality of their activities.

The university system currently caters for nearly one million students, of which 86% are in the State sector. Furthermore, there are 230,000 students attending State tertiary non-university institutes and another 130,000 in the private sector. The private university sector has evinced more dynamic behaviour than the public one in terms of enrollment growth: between 1992-1997; the number of students increased by 31% while the growth registered in national universities was 23%.

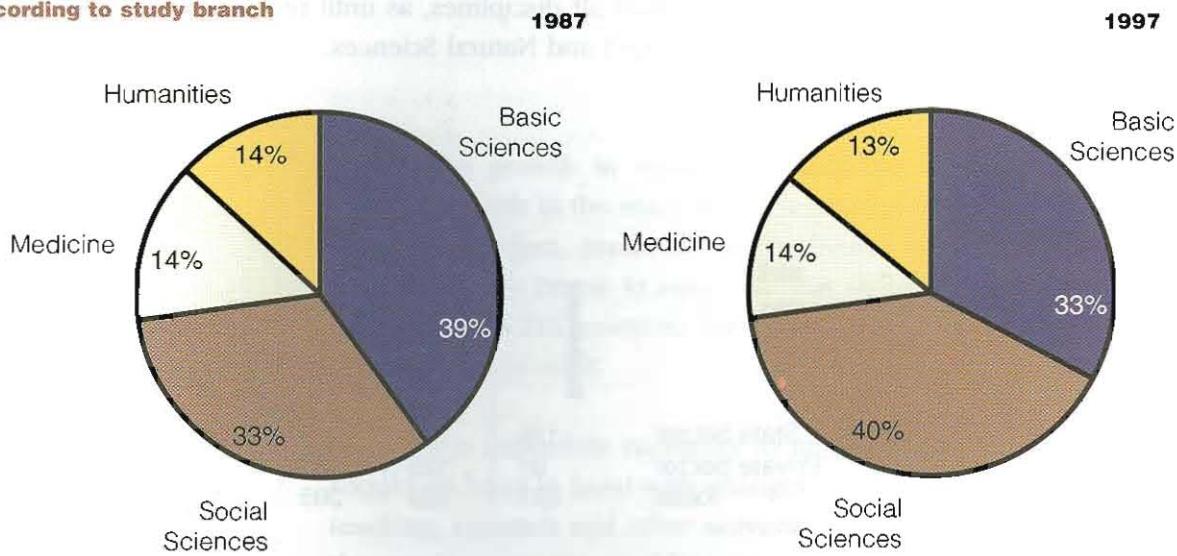
TABLE 2
University Enrolment

	1992	1997	1992	1997	Growth Rates
	1992	1997	1992	1997	
Total	803,623	996,356	100%	100%	24%
National Universities*	698,561	860,661	87%	85%	23%
Private Universities*	105,062	135,695	13%	14%	31%

* Provisional data for 1997

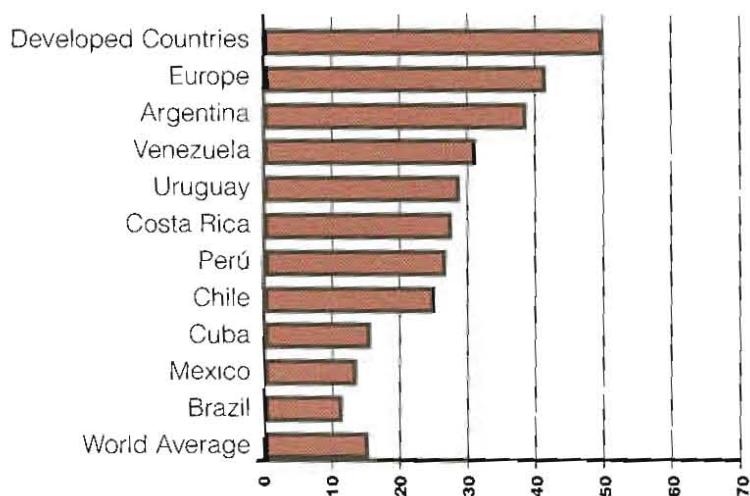
Enrolment is mostly concentrated in the area of Social Sciences and Humanities. Basic and Technological Sciences have lost the sway they held at the beginning of the 1980s when they represented almost half of the student population. In the public sector, Social Sciences have been increasing their share of the student body: from 33% in 1987 they passed to 40% in 1997. In private universities concentration in the area of Social Sciences is even greater: 62%.

CHART 1
NATIONAL UNIVERSITIES
Students according to study branch



Higher education coverage is quite broad, reaching a gross enrolment ratio which encompasses 40% of the corresponding age group (young people from 18-23), which is much higher than the Latin-American average, about 20%, and similar to that of many developed countries.

CHART 2
Gross enrolment
in tertiary education, 1994



Source: For Latin American countries: BID, Higher Education in Latin America and the Caribbean Strategy Document N° EDU-101, 1997
For European countries, developed countries and world average
UNESCO, Annual Statistical Report 1997

Post graduate university education studies have been on the increase. There are over 1000 programs currently available in public and private institutions, mostly Master and Specialisation programs. The rapid growth in Master courses is a new development in Argentina, as there were practically no programs of this type available at the beginning of the 1980s. Another new phenomenon is that post-graduate studies are being extended to include all disciplines, as until recently, they were only available in Exact and Natural Sciences.

TABLE 3
Post-graduate programs

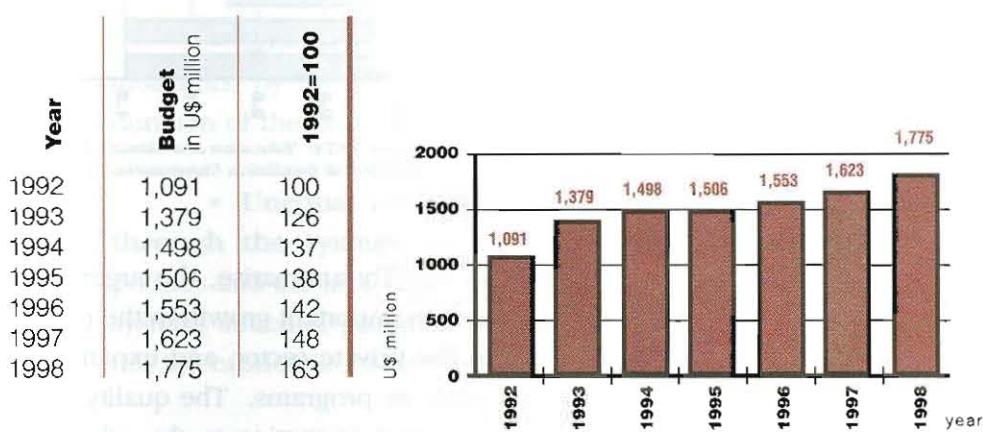
	Doctorate	Master	Specialisation	Total	Nº	%	1997
State Sector	136	268	263	667	66		
Private Sector	91	125	130	346	34		
Totals	227	393	393	1013	100		

There are 98.200 university teachers employed in the state universities, of which some 18.000 undertake research activities in their institutions, for which they receive additional remuneration as an incentive for the integrated development of the academic career. Although the percentage of teachers who are exclusively

dedicated to universities is low and there is a high number of part-time teaching staff, the full-time faculty dedicated completely to teaching, research and service activities is slowly growing.

The public university system budget reaches U\$1,775 million in 1998. A further 170 million may be added, provided by own resources generated by the universities.

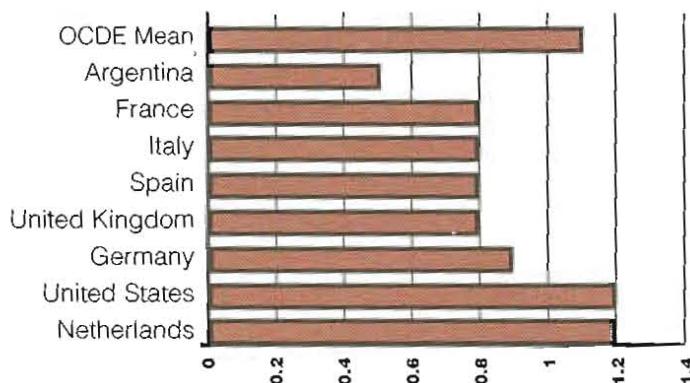
TABLE 4
University Budget
1998 constant values



The growth in resources earmarked for the sector has meant a growth in the share of the university budget in the Gross Domestic Product, reaching current figures of 0,52%. It should nevertheless be borne in mind that this share is only half of that reached in OCDE countries for higher education, which is, on average 1,1% of GDP.

It is undoubtedly necessary to improve this situation, which should go hand in hand with changes in the system which permit teaching, research and other university services to be adapted to the requirements imposed by society today.

CHART 3
Percentage share
of public spending in higher education
in selected countries. 1992



Source. OCDE. "Education at a Glance", 1995.
 For Argentina. SPU "Anuario 1996 de Estadísticas Universitarias", 1997.

To summarise, the Argentine university system experienced an important growth in the number of institutions, particularly in the private sector, and expansion and generalisation of post-graduate programs. The quality of the education differs not only from one institution to the other, but also within the same university or academic community. Accordingly, the question of evaluation and quality improvement became key issues in the discussions on higher education which took place in the last decade in this country.

Simultaneously, another of the characteristics of university education, which, together with the issue of quality, has been the subject of debate and a particular focus for the Government as regards the development of policies for the sector, is the poor internal efficiency within the institutions: graduate rates are relatively low and the duration of the programs is too long. Although the reasons for these shortcomings are many, the high proportion of working students, the absence of stricter admissions procedures in the large universities and the lax conditions which regulate attendance of students are just part of the problem. Accordingly, improvement in these indicators and guaranteeing quality standards are some of the main challenges to be addressed in the future.

**PROBLEMS AND CHALLENGES
OF THE NINETIES**

3

The main problems and challenges to be faced at the beginning of the 1990s were:

- **Progressive deterioration in the quality of education.** This was the result of processes engendered by authoritarian policies of aggression towards universities expelling the most qualified teaching staff and researchers; the creation of facile democratising policies; the progressive loosening in admissions procedures, insufficient resources and the inefficient use of the same.
- **Low academic performance,** shown, among other indicators, by the low entry/graduation ratio and the excessive duration of the programs.
- **Unequal access and progression of the students through the system,** as a consequence of free admissions policies and the lack -until very recently- of scholarship and loan systems aimed at providing support for those with the merit but not the economic resources to continue their studies.
- **Lack of admissions procedures and co-ordination with secondary education** to facilitate movements between the two levels and allow for the appropriate selection of entry-level students to the university based on their capabilities and merit.
- **Lack of reliable statistical information** which could serve as a base for decision-making and for improvements in institutions management.
- **De-investment and unequal distribution of budgetary resources** among institutions, based on traditional distribution criteria and on their potential for influence, unrelated to the performance and achievements of each institution.
- **Poor co-ordination** with the requirements and needs of the productive sector and society.
- **Lack of a common legal framework** for higher education, designed to establish the basis for the system and to promote the necessary reforms.

The main objective of the university policies developed over the last 10 years has thus been to promote reforms in the higher education system, in order to achieve:

- A diversified offer defined by its quality and capacity to meet the needs of society today.
- Greater efficiency in the use of resources earmarked by society for higher education, which requires the responsible and transparent management of public policies and of the way in which the institutions are governed.
- Greater equity in the entry and progress of the students through the system and also in the distribution of public resources among the institutions.
- Greater inter-institutional co-ordination within the higher education system and with other educational levels.

From the beginning, these objectives have been enshrined in policies which:

- Respect autonomy of university institutions, promoting greater accountability.
- Seek a new kind of State/University relationship, in which the latter should have financial autonomy to manage the resources, which the State allocates according to previously agreed results and the efficiency with which these have been achieved.
- Integration of the system main actors into the process of change, seeking dialogue with the institutions to encourage consensus and investing the bodies responsible for co-ordination with greater authority.

STRATEGIES AND
PROGRAMS IMPLEMENTED

5

The strategies implemented in the framework of the new Higher Education Act may be broken down into a series of programs and co-ordinated initiatives. These aim to improve quality, information and management, as well as equity and efficiency in the allocation of resources and in the academic performance of students. They also aim to guarantee equality of opportunities, diversify the offer, and promote the co-ordination of the system both as a whole and within its productive and social context.

a) **A new regulatory framework: the Higher Education Act**

Until 1995, Argentina did not have a regulatory instrument which could be applied to the way in which higher education worked as a whole. The standards in force arose from the sum (and in some cases these were overlapped) of various ministerial laws, decrees and resolutions. One of the main initiatives developed was the preparation and subsequent approval of a new regulatory framework for higher education.

The Higher Education Act, N° 24,521, passed on July 20, 1995, provided the sector with an institutional framework which regulates its organisation and operations in a way that is both stable and predictable. The Law has also been one of the key motivating factors in stimulating the structural reform of the system, although it has also generated controversies. Its main characteristics are the following:

- It encompasses the whole of the public and private, university and non-university higher education system. The university system continues to be regulated at national level, while the non-university tertiary education sector, as its establishments are decentralised, falls under the administration and regulation of each provincial jurisdiction.
- It foresees the co-ordination and regional link-up between public and private university institutions through the *Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior - CPRES* [Regional Councils for Higher Education Planning], which are made up of representatives from the universities in the same region and from the provincial governments. Representatives from the local productive sectors may also be included.
- It recognises and broadens autonomy and self-governance of the university institutions. It reduces State controls in the award of degrees, concentrating State attention on the

courses which are of public interest (for example in the area of health). It also eliminates State influence in the definition of teaching salaries and working conditions which become the responsibility of each institution.

- It institutionalises the internal and external evaluation of the institutions as well as the recognition of courses as a tool to improve quality and stimulate modernisation in the establishments, creating an independent body responsible for these procedures: the *Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria - CONEAU* [National Commission for University Evaluation and Accreditation].
- It emphasises the role of the academic staff in the government of the universities, providing professors with greater authority in collegiate bodies and promotes improved flexibility in university management, giving an increased priority to executive decision-making. It also establishes the requirements for students to participate in the government bodies of the public universities, including the need to meet the conditions for regular attendance and to have at least 30% of their study course complete.
- It builds in instruments aimed at improving equity by allowing for university fees to be paid for undergraduate studies, bearing in mind that these funds should be earmarked for grants for students of limited resources who are eligible for university studies.
- It foresees greater rationality in the ways in which the State budget is allocated to National Universities, leaving to one side the inertial distribution in order to adopt forms of financing based on objective indicators which take into account equity, quality and efficiency in the use of resources.

b) Improvements in university quality

In the framework of the crisis which took place during the 1980s, involving a significant increase in enrolment and growth and diversification at institutional level which accompanied growing educational demands, the academic standards of the institutions fell into decline -as has been already mentioned. This process undermined the already difficult situation of the universities, which had suffered the negative effects of the policies implemented during the military dictatorships.

Consequently, the National Government devised strategies aimed at reversing this situation, thus complying with the duty of guaranteeing the offer of an educational service featuring appropriate standards of quality and safeguarding public trust in educational institutions.

The policies implemented to improve quality are structured along two principal lines: (i) evaluation and (ii) financing linked to quality.

Active moves to promote evaluation began in 1993 when the Ministry of Culture and Education generated a series of initiatives aimed at facilitating the introduction of a culture based on evaluation and accreditation within the university system. The institutionalisation of university evaluation in Argentina was complex and conflictive, but it led to the achievement of significant level of agreement between the Government and the organisations representing the universities which gave birth to the first evaluation and accreditation of post-graduate programs in 1995. Enabled by the Higher Education Act, this process also included the creation of the National Commission for University Evaluation and Accreditation (CONEAU), an independent organisation responsible for institutional evaluation and the accreditation of courses. The following are the most important events in the institutionalisation of evaluation.

- In 1993 the Ministry of Culture and Education signed several agreements with the National Universities aimed at carrying out self-evaluation and external evaluation processes within the institutions. These agreements established that the Ministry would commit to financing the technical support needed for self-evaluation and all of the costs involved in external evaluation. At that time, half of the universities signed these agreements and many initiated evaluation activities. Within the following two years, three institutions concluded their external evaluations. With the approval of the Higher Education Act, the CONEAU took over the institutional evaluation.

- In 1995 the *Comisión Nacional de Acreditación de Posgrados - CAP* [National Post-graduate Accreditation Commission] undertook -beginning with a call for tender for voluntary presentations- a process to accredit postgraduate programs, which resulted in 176 programs from State and private universities being evaluated, accredited and qualified. Sixty percent of the programs presented were accredited in this process.

- The *National Commission for University Evaluation and Accreditation - CONEAU* was set up and began activity in 1996. This Commission is responsible for the institutional evaluation of all Argentine universities, which complements the self-evaluations undertaken by the universities as well as the accreditation of post-graduate and graduate studies which are of public interest. Also affected is the definition of recommendations for projects to create new university institutions.

Main activities undertaken by CONEAU:

- It has evaluated 43 projects for new universities (37 private, 4 national and 2 provincial) of which only 6 received approval.
- It has launched a call to present post-graduate specialisation programs, in which 803 applications have been presented and are currently under evaluation, and it has launched the process of accreditation of Master and Doctorate programs foreseeing the production of results by 1999.
- It has completed the external evaluation of two National Universities which adds to the three external evaluations completed previously as a result of the Agreements signed with the Ministry of Culture and Education.

Progress in the area of institutional evaluation has been significant. There are currently 27 institutions with evaluation processes under way.

Evaluation processes in Universities	National Universities	Private Universities	Total
Completed self-evaluations	11	2	13
Completed external evaluations	5		5
Evaluation processes under way	8	14	22
Institutions involved in evaluation processes	13	14	27

The creation of CONEAU instituted, for the first time in the history of this country, a set of tools which are indispensable in ensuring the EVALUATION OF QUALITY of university education within a broad framework of academic independence.

Today, there is a clear understanding within the university community that evaluation is a fundamental tool which enables decision-making and the definition of institutional policies.

University evaluation is an important instrument in the process of raising awareness among the academic community involved and it permits the university to inform society in a transparent fashion as to the way it is carrying out its missions.

However, it acquires deeper relevance as a basis to design programs aimed at modifying the weaknesses detected during the evaluation process.

Consequently, mechanisms have been designed and implemented in parallel to the promotion and institutionalisation of evaluation which (a) encourage the development of capabilities and human resource training in higher education *Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores en las universidades nacionales* [Program of Incentives for Teacher-Researchers of National Universities] and (b) finance the plans for reform and quality improvement in National Universities by providing complementary resources in addition to their own normal budgetary funds (*Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria - FOMEC* [Fund for Improvements in the Quality of Universities]).

- The *Program of Incentives for Teacher-Researchers of National Universities* stimulates integrated academic careers and an increase in teacher dedication, encouraging greater participation in research activities. Additional funds have been earmarked for this, which reward higher academic achievements of teacher-researchers. The beneficiaries of the Incentives Program are those teaching staff who take part in research projects which must be evaluated and approved by the competent bodies with external judges.

The Incentives Program receives U\$70 million on an annual basis. In 1997 this program gave incentives to 18,000 teachers involved in 6,000 research projects in 32 Universities.

This strategy allows for progress to be made as regards the process of evaluation within the system itself, discriminating quality and rewarding excellence.

- The *Fund for Improvements in the Quality of Universities - FOMEC* is another instrument through which additional resources are channeled to Universities to meet specific goals. It is a competitive fund, aimed at providing financial support for reform and quality improvement processes in National Universities through projects designed by the institutions and selected according to evaluations held by Peer Review Committees that take into account projects quality, relevance and impact. The program has a budget of U\$240 million to distribute over 5 years which is in part provided by a loan granted by the World Bank to the Argentine Government. In 1998 FOMEC received additional funding from the National Budget, which is expected to be increased so as to substitute external funding.

FOMEC leading objectives are:

Support for academic reforms: modernisation of study programs, creation of co-ordinated cycles, departmentalisation, etc.

Improvements in the quality of teaching: teacher training, equipment modernisation, consolidation of post-graduate programs, etc.

Search for greater efficiency in academic activities.

Since the creation of the program in 1995, 329 projects from 34 universities have been approved for a total of U\$175,2 million.

- *1.700 post-graduate scholarships were awarded to young teachers.*
- *37 university or school central libraries were given support.*
- *U\$76,4 million were invested in equipment, U\$18.8 million in books and U\$80 million in human resources.*
- *80% of post-graduate accredited programs were given support.*

FOMEC is an innovative instrument aimed at financing structural changes in universities and improvements in the quality and efficiency of the institutions.

It is a transparent and ample mechanism which encourages the formation of a new State-university relationship, based on evaluation and on financing aimed at achieving shared objectives.

c) Efficiency and equity in the allocation of resources

The National university system in Argentina is almost exclusively financed by the State. Traditionally the budget was distributed between the universities according to the Budget Law, based on the historical shares of each university, without taking into account either issues concerning efficiency and equity, nor any objective indicators reflecting the particular situation of each institution. This form of budgetary distribution left no margin for the introduction of incentives aimed at improving the efficiency of university activities and correcting existing regional disparities.

As from 1993 new mechanisms were set up aimed at strengthening the system financing, making efficient use of public resources, nurturing universities financial autonomy and using the budget as a tool designed to bring about the changes envisaged. Together with the increase in state resources earmarked for universities, a *New Budgetary Allocation System* came into force, which focuses on and promotes efficiency and results achieved by the universities.

The New Budgetary Allocation System combines objective models for allocating resources to develop teaching together with contractual schemes which regulate other specific areas, such as investment in infrastructure, equipment and teacher training.

The distribution of resources is carried out according to the performance of the institutions in terms of efficiency and equity indicators such as the relations between graduates and new entrants, the subjects passed per student on an annual basis and the number of auxiliary staff over the number of teachers.

- Since 1997, all increases in budgetary resources have been allocated through mechanisms of this kind, clearly indicating the starting of a new mode of budgetary allocation.
- In 1998, the increased resources assigned within this mode come to 17% of the university budget provided by public financing.
- Furthermore, the criteria for efficiency should incorporate quality indicators so as to promote focused activities and support programs characterised by their excellence.

The additional resources earmarked for each university arise from the application of formulas which allow for greater equity in the way financing is distributed between institutions. The allocation of funding is undertaken through contractual systems, which means that transfers are conditioned by agreements established between the Secretariat of University Policies and National Universities, whereby these undertake to guarantee the correct and efficient use of resources and improve the provision of educational services on the basis of programs which share clear and audit-worthy goals.

This new way of allocating funds is based on the principle of reciprocal responsibility, which ensures the financing for university projects and the best possible fulfilment of the objectives proposed.

d) Improvements in management and information

The process of transformation in higher education requires improvements in general management systems as well as in the production and management of the information needed for co-ordination, planning and decision-making within both the Ministry and the universities.

Up until 1993, neither the Government nor the Universities had the elements they needed to improve either administrative and academic management procedures or the quality of the information generated, which meant that the sector's productivity was also impaired. The policies implemented to reverse this situation comprise: production, communication and systematisation of information on the university system. Following are some of the instruments developed:

The *Sistema de Información Universitaria (SIU)* [University Information System], which develops and makes available to universities an information system (composed by several modules), which allows for improvements in academic and administrative management, and the production of statistical information needed for decision-making purposes.

Information systems developed:

- **Economic, budgetary and financial system.**
- **Human resources management system.**
- **Economic and financial consolidation system.**
- **Academic system.**

Together with the SIU, the *Red de Interconexión Universitaria (RIU)* [University Connecting Network] provides the infrastructural support for the exchange of information, by linking up the various National Universities and the Ministry of Education. The network facilitates the co-ordination of communication at national level and the access to up-to-date information on the National University System. The RIU has links with other similar networks in Argentina and with abroad through Internet.

The *Programa de Estadísticas Universitarias* [University Statistics Program] prepares and publishes basic statistics on the Universities. This Program has been able to:

- Reconstruct the historical series of basic statistics on students, new entrants and graduates.

- Put together a set of basic performance indicators on the National Universities, which has resulted in the detection of some critical issues: low graduation rates, a concentrated demand in a limited number of programs, a drop in basic and technological sciences, etc.
- Carry out for the first time a national census of university students and obtain a fully comprehensive characterisation of the student population of the National Universities.
- Publish, also for the first time, a document dedicated exclusively to provide information on all Private Universities.
- Begin the systematic publication of a University Statistics Annual Report which includes information on the student population, university staff, university budgets, and on the various programs run by the Secretariat.

The continuous statistics program is currently being perfected and new indicators are being developed for decision-making purposes.

e) **Equity in access and progress in higher education**

One of the problems with our Higher Education is the low level of equity in the entry to and progress of students through the system, which is in part due to the consequences of free tuition policies, of the negative effects of selection implicit in the unrestricted access to universities and the flaws inherent in a insufficiently widespread system of scholarships and loans.

The Higher Education Act introduced modifications to university financing oriented towards these kinds of improvements. On the one hand, the law clearly establishes the untransferable responsibility of the State in sustaining State higher education. On the other, it lifts the prohibition on charging fees for undergraduate studies, establishing that this is the competence of each university. If they do charge fees, these resources should be channeled towards providing scholarships and support for students of limited means. In this way the principle of "free and fair" education enshrined in the National Constitution and the Federal Education Act are fulfilled.

Although in this sense things have been slow to change in most universities, in the more recently created ones, fees or student contributions have been set to help maintain the institutions and promote equity.

On the other hand, independently from the actions taken by the universities, the Ministry of Culture and Education has created the *Programa Nacional de Becas Universitarias* [National Program of University Scholarships], and the *Programa Nacional de Crédito Educativo* [National Program of Educational Loans for Higher Education] to promote equality of opportunities and possibilities within higher education.

- **The National Program for University Scholarships** promotes both equity and good academic performance through an objective and transparent allocation system.
 - Scholarship students are from very low income families and a high percentage of parents are either unemployed or under-employed.
 - Scholarship students are good students: more than 50% obtain an average of over 8 points.
-
- **The National Program for Educational Loans for Higher Education** complements the Scholarship Program, and is also based on objective and transparent criteria as regards its grant policy.
 - It is aimed at students following programs of over two years' duration in universities or recognised tertiary institutes.
 - It offers loans of a value of U\$2,000 per year, which the student must reimburse when he or she graduates.

f) Expansion of educational opportunities at higher level

Faced with the growth in enrolment in public universities and the high concentration in certain professional long-duration programs (law, accountancy, medicine) the Government is promoting the expansion and diversification of higher education through the development of new tertiary non-university institutions for technical and professional training as well as through an increase in the number of state and private universities.

The Higher Education Act incorporated the possibility of creating *University Colleges* accredited by and co-ordinated with one or more universities aimed at offering short, flexible and/or fixed-term programs. The aim is to promote new alternatives so as to be able to meet the demand for higher education, particularly in communities which do not have access to university programs.

The creation of *Technological Institutes* is also being promoted. They are expected to meet the requirements for skilled human resources imposed by the process of socio-economic change and development, thus improving employment prospects for graduates.

Diversification of higher education is critical to ensure generalised access to quality post-secondary training in the medium term.

Given the importance of this diversification, the Government has set up the *Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (PRESTNU)* [Non-University Higher Education Reform Program], which has the financial support of the Inter-American Development Bank. It is aimed at promoting the creation of new models for technological institutes which meet the demands of the productive sector in their recruitment area and which are designed, directed and financed with the participation of local government authorities, (provincial or municipal), private industry sectors, commerce or services, and, eventually, universities.

Likewise, the Government has removed the existing restrictions which limited the creation of private universities, which are nevertheless subject to external evaluation and accreditation processes guaranteeing the correct standards of quality.

In this way, the conditions have been created for the development of a diversified and complex higher education system which has the growing capacity to meet the differing educational demands of the population.

g) Co-ordination between universities and the productive sector

At this stage of development, knowledge has become the key element in the new social and productive paradigm, investing both education in general and, in particular, higher education, with greater social value. Within this framework, higher education institutions have a key role both in human resources training and in the production, adaptation and dissemination of the necessary know-how to enhance socio-economic development.

In order to permit higher education to fulfill this mission efficiently, actions have been taken which aim to increase its relevance. In the field of research and services, the links between

universities, the productive sector and the social organisations in each region have been promoted. Those research and service developments which meet the local needs of the context in which institutions are settled have been given priority.

These links are growing and allow for increases in own resources as generated by the institutions, which contributes to a diversification in finance sources and to a general increase in sector financing. The main actions taken by the Government to encourage co-ordination with the productive sector and increase the generation of own resources have been:

- Modifications in the *Economic and Financial Regime* of the Universities, which did away with existing restrictions for public universities as regards the generation and administration of resources additional to contributions provided by the National Treasury.
- The inclusion of a clause in the Higher Education Act which prohibits the limitation of state contributions based on income generated in any way by the universities.

As a result, currently some 10% of the university budget is provided by own resources generated by the institutions.

On the other hand, in 1994, the *Programa de Vinculación Tecnológica en las Universidades* [Program of Technological Link-up in Universities] was set up in the context of the Secretariat of University Policies, but has recently been transferred to the Secretariat of Science and Technology in the Ministry of Culture and Education. The main aim of this program is to develop actions which improve links between Universities and the productive sector, promoting technological innovation and its applications as regards socio-economic development.

Some results from the Program of Technological Link-up in Universities

- Creation of Technological Link-up Units in Universities
- Training of Technological Link-up project managers
- Fact-finding and dissemination of the technological developments produced by the Universities.
- Promotion of the various forms of Technological Link-up, such as micro-enterprises and the creation of business incubators.
- Dissemination of the benefits of the Law of Technological Innovation.

h) Co-ordination of the system

The Argentine education system has always been characterised both by its diversity and poor internal and external coordination. There are both state-run and private universities and university institutes of different sizes and age which offer a great variety of programs of different standards of quality. In some cases similar programs given in the same geographic region are overlapped, which reduces the efficacy of the resources invested in the system.

In order to improve the way in which the system is co-ordinated, several initiatives have been developed:

- In 1993 the *Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES)* [Regional Higher Education Planning Councils] were set up in order to co-ordinate the actions taken by universities in the same geographic region and to co-ordinate the plans and programs to be developed with public and private bodies in their district. The CPRESs are integrated by representatives of national and private universities as well as by representatives of provincial governments.

The CPRES develop co-ordination programs among university institutions in a particular region, and promote the organisation of regional post-graduate programs, as well as designing plans for technological link-up at regional level.

The Higher Education Act recognises the importance of the role of the existing co-ordination bodies, such as the *Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)* [National Inter-University Council], integrated by the presidents of public universities, and the *Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)* [Council of Presidents of Private Universities]. These two entities, together with representatives of the CPRES and a representative of the *Consejo Federal de Cultura y Educación* [Federal Council of Culture and Education], comprise a new and more advanced level of co-ordination: the *Consejo de Universidades (CU)* [University Council] presided by the Minister of Culture and Education.

Principal missions of the University Council:

- To make proposals for the definition of policies and strategies relevant to university development.
- To promote co-operation between university institutions.
- To encourage the adoption of guidelines for the co-ordination of the university system.
- To define criteria and guidelines with the Federal Council of Culture and Education on co-ordination among higher education institutions.

The need to move forward in the application of the Higher Education Act and strengthen the strategic reforms under way lead to a set of priorities which will have to be faced over the next few years.

Strengthening of the higher education system

The tendencies of isolation and limited association manifested within universities challenge the very concept of a university system. In Argentina, for instance, there are large quantities of programs on offer, some of which overlap, while at the same time other strategic areas of learning remain uncovered. This is a field in which Universities autonomy goes against the grain of the system's rationale, if they do not make the effort to co-ordinate and co-operate with each other. Still on the agenda, then, is the development of an institutional culture promoting greater co-operation and not only competition among institutions.

Strengthening the system's potential for coordination can contribute to resolving regional disparities and differences between subject courses, introducing rational criteria in order to organise the offer of programs from different institutions in the same region and to support the development of vacant areas. This would also mean a more efficient use of the physical, human and financial resources available.

Improvements in the way the co-ordinating organisations function and co-operate with each other are the key to meeting the challenges.

Systems of access to universities and co-ordination with secondary school

The lack of appropriate university admissions policies and the relative scarcity of other education opportunities lead many students finishing secondary school to enrol in universities. Many of them are neither sufficiently motivated nor well prepared for university studies, leading to high drop-out and retake rates during the first years of study. This has a detrimental effect on the efficient use of resources and limits the possibility of offering quality higher education.

Evidence shows that results in terms of graduation rates are partly linked to the existence of university admissions systems. This justifies the need to co-ordinate actions with the middle level, reconciling the right to complete education which arises from the principle of equality of opportunities with the search for higher academic quality.

Legislation currently in force empowers universities with the authority to establish their own admissions policies, which consequently differ from one to the other: there are currently several kinds of university entry systems in use in this country, and although this is a positive sign that illustrates the diversity and multiplicity of the university system, it also produces some waste of efforts and has not yet allowed for improvements in graduation rates throughout the system, although there are a few exceptions.

Therefore, the debate and adoption of policies which concern university admissions systems and their interface with the middle levels is a key priority for change in higher education. The Government is promoting the design and trial of a Co-ordination System between the Middle Level and the University, which provides for aptitude and knowledge tests to be taken at the end of secondary education. These tests would be carried out nation-wide and successful candidates would receive a Basic Aptitude National Certificate. This certificate could be used by universities as an additional element to be taken into account for entry at higher level according to the criteria and admissions requirements established by each institution.

Curricular reform aimed at increasing the relevance of higher education

The technological, productive and social changes which are taking place in this day and age (dissemination of new technologies, mass access to information and swift dissemination and learning of know-how) make it necessary for higher education to change the training it offers so as to turn out graduates with the skills and competence required today.

The changes taking place in the working world shorten the useful life-span of professional skills acquired in traditional university programs, while the speed at which these changes take place is creating a framework of uncertainty as regards the jobs for future graduates. Accordingly, the main characteristics they need to develop to meet current demands are versatility, the ability to be open to and generate change, the ability to identify and resolve problems and to analyse, evaluate and choose from multiple alternatives, considering the relative value of each solution according to the context and the timing involved.

In order to train technicians, professionals and academics with the afore-mentioned skills, curricular and teaching reforms are necessary to stimulate the organisation of a more diversified and flexible higher education. These should facilitate the possibility of

entering the educational system at different points in a person's life according to a model which allows work periods to be combined with educational ones. There is now a new alternative to traditional models as curricular organisation becomes based on programs structured in cycles which are founded on a broad and interdisciplinary solid basic training platform. These later give way to a period of specialisation co-ordinated with the job market.

Many institutions have started integral curricular reform processes, but these still do not apply to the system as a whole. Therefore, the need to extend and deepen the reforms initiated has become a matter of urgency so that the institutions can adapt their offers to the economic, social and cultural demands of society today.

Strengthening of academic management

The existence of modern management as part of university organisation in Argentina is rare. If strong university leadership demands the right combination of academic, administrative and political aspects at management level, in the Argentine case the political element is often unduly weighty. The institution then becomes a battlefield of clashes between parties which undermines both the quality of university education and the efficient management and government of the universities.

However, there has been some progress in this area, not always visible, particularly since the implementation of the Higher Education Act and the ensuing adaptation of the university statutes to meet its requirements. In any case, there is still much to be done in terms of rendering the government and management of universities more professional.

Transformation of the labour regime and revaluing of university activity

The policy of incentives aimed at the integrated development of teaching and research has allowed for progress in the re-valuing of academic activity, resulting in increased productivity of the teacher-researchers.

However, it is necessary to continue revising the current parameters which define academic work and change the labour regime in force. This will in turn permit academic work to be re-valued so that the university system is able to attract the best graduates who have the vocation to dedicate themselves to this task.

Statistical Appendix

1 STUDENTS

Table I

National Universities

Number of Students

1997

	University	Students
Total		860,661
Universidad de Buenos Aires	185,322	
Universidad Nacional de Córdoba	93,194	
Universidad Nacional de La Plata	76,355	
Universidad Tecnológica Nacional	64,975	
Universidad Nacional de Rosario	62,164	
Universidad Nacional del Nordeste	45,548	
Universidad Nacional de Tucumán	44,125	
Universidad Nacional de Lomas de Zamora	27,356	
Universidad Nacional de Cuyo	23,229	
Universidad Nacional del Litoral	20,825	
Universidad Nacional de Mar del Plata	20,144	
Universidad Nacional del Comahue	17,803	
Universidad Nacional de Salta	15,490	
Universidad Nacional del Sur	15,064	
Universidad Nacional de La Matanza	13,746	
Universidad Nacional de Luján	12,839	
Universidad Nacional de San Juan	12,587	
Universidad Nacional de San Luis	11,726	
Universidad Nacional de Misiones	11,100	
Universidad Nacional de Río Cuarto	10,924	
Universidad Nacional de Entre Ríos	9,344	
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco	9,241	
Universidad Nacional de Catamarca	8,872	
Universidad Nacional de La Rioja	8,864	
Universidad Nacional de Jujuy	7,805	
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.	7,375	
Universidad Nacional de La Pampa	6,237	
Universidad Nacional de Santiago del Estero	4,685	
Universidad Nacional de Formosa	3,819	
Universidad Nacional de la Patagonia Austral	3,383	
Universidad Nacional de Quilmes	2,485	
Universidad Nacional de General San Martín	1,473	
Universidad Nacional de General Sarmiento	1,354	
Universidad Nacional de Lanús	639	
Universidad Nacional de Villa María	569	

(Provisional data)

TABLE 2
Private Universities
Number of Students
1997

Total	Students
Total	135,695
Universidad de Morón	15,443
Universidad Argentina de la Empresa	13,284
Universidad Argentina John F. Kennedy	13,168
Universidad del Salvador	12,876
Pontificia Univ. Católica Arg. Sta. María de los Bs. As.	10,892
Universidad de Belgrano	9,768
Universidad de Palermo	4,970
Universidad Católica de Santa Fe	4,588
Universidad Católica de Córdoba	4,393
Universidad Católica de La Plata	4,233
Universidad Católica de Salta	4,190
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino	3,328
Universidad de Mendoza	3,261
Universidad Católica de Santiago del Estero	2,874
Universidad CAECE	2,452
Universidad Católica de Cuyo	2,419
Universidad del Museo Social Argentino	2,315
Universidad Blas Pascal	2,256
Universidad del Aconcagua	2,195
Inst. Univ. de Cs. de la Salud de la Fundación Barceló	1,908
Univ. de la Frat. de Agrup. Santo Tomás de Aquino	1,642
Universidad Juan Agustín Maza	1,613
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales	1,563
Universidad Champagnat	1,307
Instituto Tecnológico de Buenos Aires	1,288
Universidad Abierta Interamericana	832
Universidad Adventista del Plata	791
Universidad Austral	760
Universidad de Concepción del Uruguay	744
Universidad Torcuato Di Tella	599
Universidad de Flores	571
Universidad del Cine	484
Universidad de la Marina Mercante	477
Universidad Maimónides	430
Universidad de San Andrés	410
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano	406
Universidad de la Cuenca del Plata	398
Universidad Atlántida Argentina	252
Inst. Univ. de Cs. Bioméd. de la Fund. Univ. Dr.Favaloro	167
Universidad Hebreo Argentina Bar Ilan	148

(Provisional data)

TABLE 3
Number of University Students
 from 1992 to 1997

Year	National Universities	Private Universities	Total
1992	698,561	105,062	803,623
1993	674,868	112,837	787,705
1994	719,671	124,749	844,420
1995	766,847	126,981	893,828
1996	812,308	130,155	942,463
1997*	860,661	135,695	996,356

* Provisional data.

CHART 1
National Universities
Number of University Students
 from 1992 to 1997

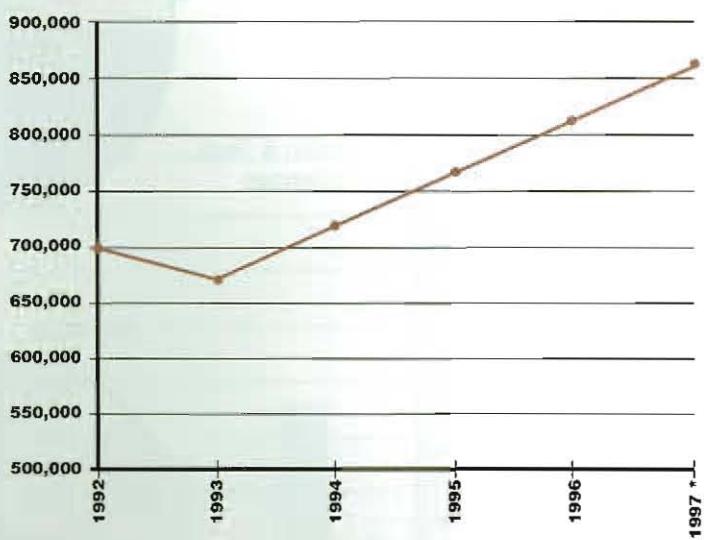


CHART 2
Private Universities
Number of University Students
 from 1992 to 1997

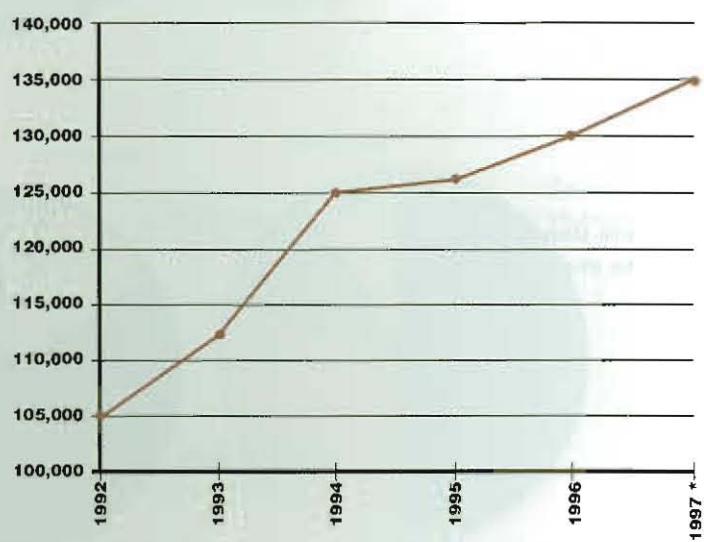


TABLE 4
Students according to study branch
1997

Study Branch	Total	National	Private
Total	996,356	860,661	135,695
Basic & Technological Sciences	312,197	283,158	29,039
Social Sciences	427,081	342,543	84,538
Humanities	132,019	115,329	16,690
Medicine	125,059	119,631	5,428

* Provisional data

CHART 3
National and Private Universities
Students according to study branch
1997

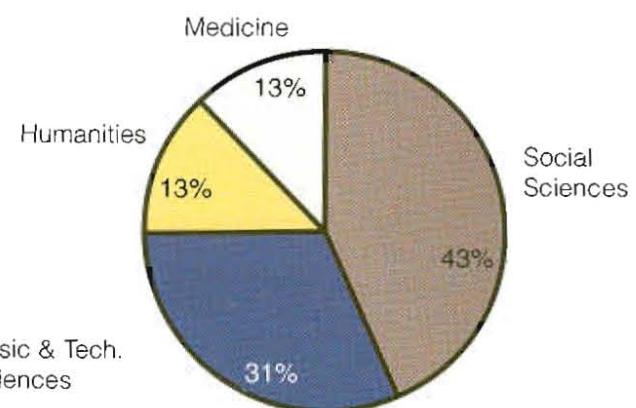


CHART 4
National Universities
Students according to study branch
1997

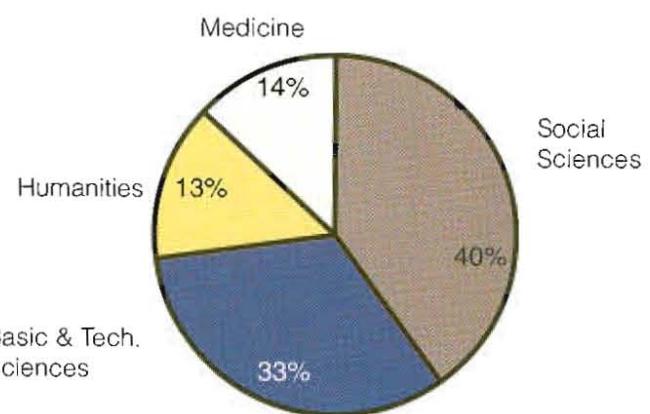
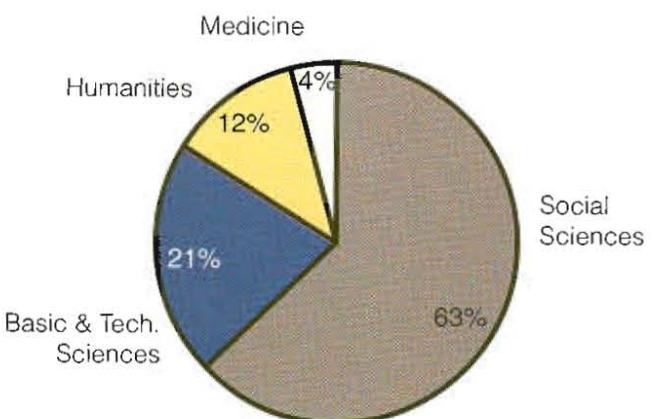


CHART 5
Private Universities
Students according to study branch
1997



2 TEACHING & RESEARCH

Statistical Appendix

CHART 6
National Universities
Number of Teacher- Researchers
receiving Incentives
from 1994 to 1997

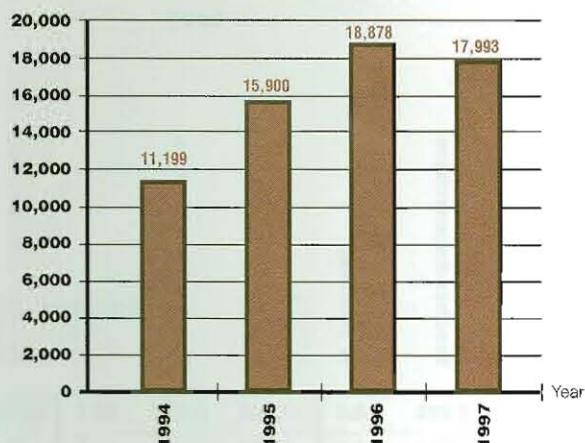


CHART 7
Total academic staff and
Number of Teacher- Researchers
receiving Incentives
1997

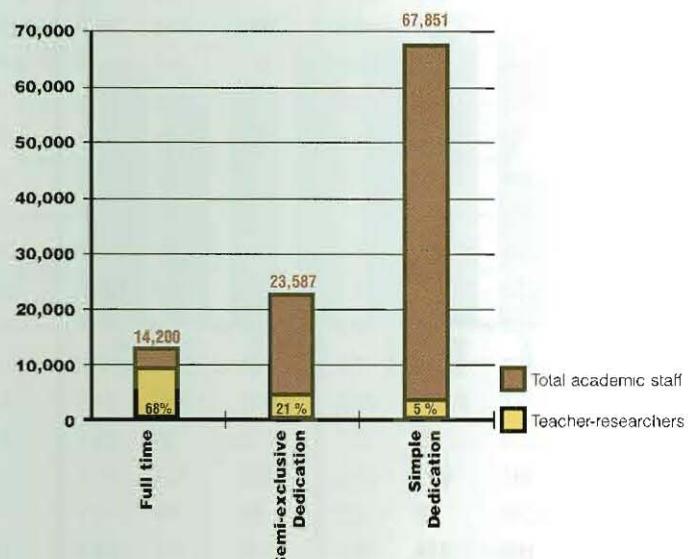


CHART 8
Distribution of research projects
developed under the
Program of Incentives for
Teacher Researchers
according to discipline
1997

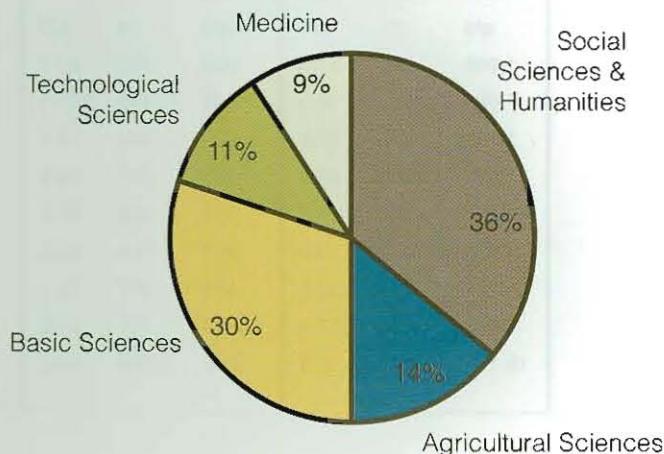


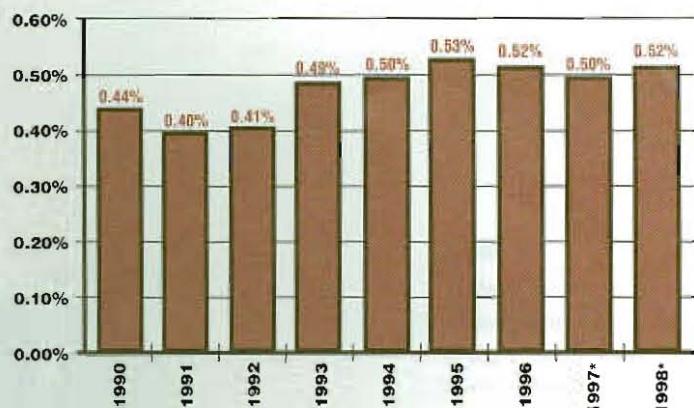
TABLE 5
National Universities
Total Academic Staff & Teacher-Researchers
receiving incentives, according to dedication
1997

University	Academic Staff			Teacher-Researchers			Teacher-Researchers			Teacher-Researchers			Teacher-Researchers		
Total	Total	Total	% T-R/total	Total	Total	% T-R/total	Total	Total	% T-R/total	Total	Total	% T-R/total	Total	Total	% T-R/total
Total	109,516	17,993	16.4	14,200	9,695	68.3	23,587	4,962	21.0	67,851	3,336	4.9			
UBA	21,228	3,262	15.4	2,399	1,765	73.6	2,829	554	19.6	16,600	943	5.9			
Catamarca	1,273	301	23.6	255	176	69.0	411	101	24.6	279	24	8.6			
Centro	1,911	489	25.6	425	315	74.1	263	92	35.0	1,180	82	6.9			
Comahue	1,699	443	26.1	497	296	59.6	504	94	18.7	695	53	7.6			
Córdoba	7,044	1,394	19.8	883	643	72.8	2,563	469	18.3	3,598	282	7.8			
Cuyo	3,914	780	19.9	341	245	71.8	1,810	353	19.5	1,426	182	12.8			
Entre Ríos	1,511	159	10.5	104	119	114.4	776	36	4.6	588	4	0.7			
Formosa	750	90	12.0	80	31	38.8	226	34	15.0	444	25	5.6			
Gral. San Martín	388	59	15.2	34	17	50.0	188	33	17.6	105	9	8.6			
Jujuy	669	186	27.8	137	80	58.4	384	97	25.3	148	9	6.1			
La Matanza	1,263	182	14.4	345	117	33.9	535	55	10.3	342	10	2.9			
La Pampa	1,233	285	23.1	185	128	69.2	307	95	30.9	736	62	8.4			
La Patagonia Austral*	404	91	22.5	130	67	51.5	305	11	3.6	106	13	12.3			
La Patagonia S. J. B.	1,817	144	7.9	146	71	48.6	537	38	7.1	1,134	35	3.1			
La Plata	9,277	2,055	22.2	1,007	853	84.7	1,851	773	41.8	6,419	429	6.7			
La Rioja	875	76	8.7	120	35	29.2	303	32	10.6	333	9	2.7			
Litoral	3,191	697	21.8	339	324	95.6	946	261	27.6	1,226	112	9.1			
Lomas de Zamora*	2,016	62	3.1	85	39	45.9	149	14	9.4	1,173	9	0.8			
Luján	1,189	214	18.0	220	117	53.2	280	59	21.1	671	38	5.7			
Mar del Plata	3,880	782	20.2	667	507	76.0	783	134	17.1	2,409	141	5.9			
Misiones	1,638	258	15.8	243	140	57.6	642	87	13.6	753	31	4.1			
Nordeste	3,827	247	6.5	275	128	46.5	375	45	12.0	2,885	74	2.6			
Quilmes	s/d	61	s/d	s/d	54	s/d	s/d	6	s/d	s/d	1	s/d			
Río Cuarto	1,348	700	51.9	602	482	80.1	397	164	41.3	226	54	23.9			
Rosario	7,062	1,127	16.0	444	449	101.1	1,589	359	22.6	4,218	319	7.6			
Salta	1,193	452	37.9	400	289	72.3	582	145	24.9	211	18	8.5			
San Juan	2,636	606	23.0	831	387	46.6	994	165	16.6	811	54	6.7			
San Luis	1,396	521	37.3	681	429	63.0	437	76	17.4	197	16	8.1			
Santiago del Estero	896	172	19.2	261	126	48.3	253	41	16.2	318	5	1.6			
Sur	1,752	622	35.5	471	396	84.1	262	107	40.8	918	119	13.0			
Tucumán	3,885	1,052	27.1	1,229	711	57.9	1,795	305	17.0	769	36	4.7			
UTN	18,170	424	2.3	266	159	59.8	510	127	24.9	16,931	138	0.8			

*Data from 1996

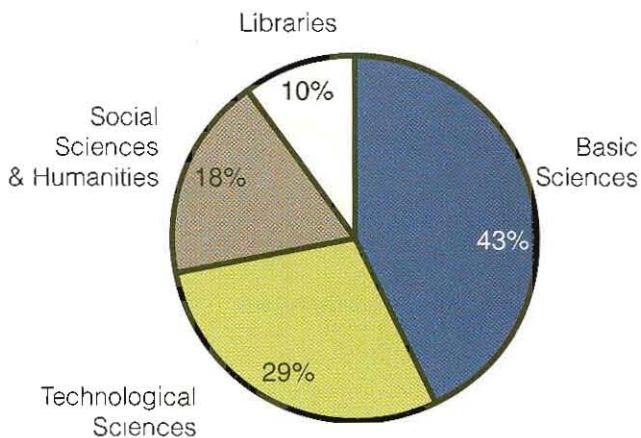
4 RESOURCES

CHART 8
**Public Expenditure
on University Education
as percentage of
Gross National Product**
1990-1998



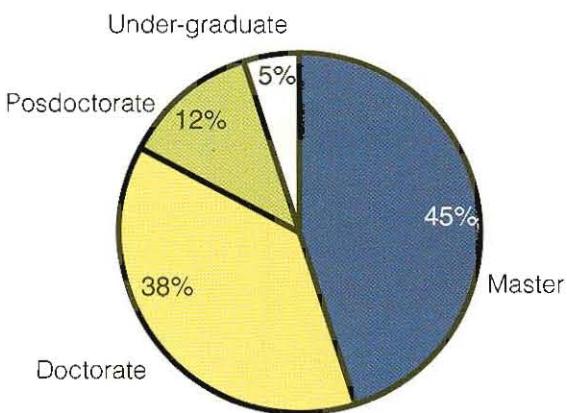
*GNP provisional data

CHART 10
FOMEC
Distribution of allocated funds according to discipline
1995, 1996 y 1997



US \$ 175 million

CHART 11
FOMEC
Distribution of scholarships according to level
1995, 1996 y 1997



1,780 Scholarships

Se terminó de imprimir en la
División Gráfica de Centro de Copiado La Copia s.r.l.
Av. Warnes 2361 Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.
En el mes de Setiembre de 1998.